H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO L X V I LEGISLATURA



DIRECTORIO

PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN DIP. CARLOS EMILIO CONTRERAS GALINDO

MESA DIRECTIVA DEL MES DE DICIEMBRE PRESIDENTA: ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ

DIP. AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO

VICEPRESIDENTE:

DIP. PABLO CESAR AGUILAR PALACIO

SECRETARIO PROPIETARIO:

DIP. ARTURO KAMPFNER DÍAZ

DIP. SECRETARIO SUPLENTE:

DIP. ISRAEL SOTO PEÑA

SECRETARIO PROPIETARIO:

DIP. FELIPE MERAZ SILVA

SECRETARIO SUPLENTE

OFICIAL MAYOR

LIC. LUIS PEDRO BERNAL ARREOLA

RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN

LIC. DAVID GERARDO ENRÍQUEZ DÍAZ

CONTENIDO

DRDEN DEL DIA	4
ECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA PARA SU TRÁMITE	
NICIATIVA PRESENTADA POR EL C. DIPUTADO OCTAVIO CARRETE CARRETE, QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY DRGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO	8
NICIATIVA PRESENTADA POR EL C. DIPUTADO PABLO CESAR AGUILAR PALACIO, QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO	1
NICIATIVA PRESENTADA POR EL C. DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX, QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY DE .OS TRABAJADORES DE LOS PODERES DEL ESTADO DE DURANGO	14
NICIATIVA PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS FERNANDO BARRAGÁN GUTIÉRREZ Y RAÚL VARGAS MARTÍNEZ, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A MIGRANTES DEL ESTADO DE DURANGO	17
niciativa presentada por el diputado agustín bernardo bonilla saucedo, que contiene reformas y Adiciones a los códigos penales del estado de durango	34
ECTURA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, QUE CONTIENE DEROGACIONES A LOS CÓDIGOS PENALES /IGENTES EN EL ESTADO Y REFORMA INTEGRAL DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA IRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE DURANGO	39
ECTURA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN QUE CONTIENE LEY ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS Y PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS	54
ECTURA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE DURANGO	62
PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO "BIENVENIDO PAISANO" PRESENTADO POR EL DIPUTADO FELIPE MERAZ SILVA	66
PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO "DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS EN LA LEGISLACIÓN LABORAL" PRESENTADO POR EL DIPUTADO ISRAEL SOTO PEÑA	67
PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN CUITLÁHUAC AVALOS MÉNDEZ, DENOMINADO VIVIENDA"	68
PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA GARCÍA VALENZUELA, DENOMINADO "PREVENCIÓN"	69
PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR EL DIPUTADO FELIPE DE JESÚS ENRÍQUEZ HERRERA, DENOMINADO ADMINISTRACIÓN PUBLICA"	70
PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ, DENOMINADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"	7
PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ, DENOMINADO DIVERSIDAD DE GÉNERO EN DURANGO"	72
PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR EL DIPUTADO ISRAEL SOTO PEÑA, DENOMINADO "DÍA DEL MIGRANTE"	73
TLALISLIRA DE LA SESIÓN	74

ORDEN DEL DÍA

SESIÓN ORDINARIA H. LXVI LEGISLATURA DEL ESTADO SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DICIEMBRE 16 DEL 2014

ORDEN DEL DÍA

10	REGISTRO DE ASISTENCIA DE LAS Y LOS SEÑORES DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA H. LXVI LOCAL.	LEGISLATURA
	DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM.	
20	LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL ACTA VERIFICADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL 2014.	
30	LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA PARA SU TRÁMITE.	
40	INICIATIVA PRESENTADA POR EL C. DIPUTADO OCTAVIO CARRETE CARRETE, QUE CONTIENE RE LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO.	FORMAS A LA
		(TRÁMITE)
50	INICIATIVA PRESENTADA POR EL C. DIPUTADO PABLO CESAR AGUILAR PALACIO, QUE CONTIE A LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE D	
		(TRÁMITE)
60	INICIATIVA PRESENTADA POR EL C. DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX, QUE CONTIENE RE LEY DE LOS TRABAJADORES DE LOS PODERES DEL ESTADO DE DURANGO.	FORMAS A LA
		(TRÁMITE)

7o.-INICIATIVA PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS FERNANDO BARRAGÁN GUTIÉRREZ Y RAÚL VARGAS MARTÍNEZ, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A MIGRANTES DEL ESTADO DE DURANGO. (TRÁMITE) INICIATIVA PRESENTADA POR EL DIPUTADO AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO, QUE CONTIENE 80.-REFORMAS Y ADICIONES A LOS CÓDIGOS PENALES DEL ESTADO DE DURANGO. (TRÁMITE) 90.-LECTURA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, QUE CONTIENE DEROGACIONES A LOS CÓDIGOS PENALES VIGENTES EN EL ESTADO Y REFORMA INTEGRAL DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE DURANGO. 10o.-LECTURA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN QUE CONTIENE LEY ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS Y PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS. 110.-LECTURA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE DURANGO. 12o.-PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO "BIENVENIDO PAISANO" PRESENTADO POR EL DIPUTADO FELIPE **MERAZ SILVA** 130.-PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO "DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS EN LA LEGISLACIÓN LABORAL" PRESENTADO POR EL DIPUTADO ISRAEL SOTO PEÑA.

140	ASUNTOS GENERALES	
-----	--------------------------	--

PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN CUITLAHUAC AVALOS MENDEZ, DENOMINADO "VIVIENDA".

PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA GARCÍA VALENZUELA, DENOMINADO "PREVENCIÓN".

PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR EL DIPUTADO FELIPE DE JESÚS ENRÍQUEZ HERRERA, DENOMINADO "ADMINISTRACIÓN PUBLICA".

PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ, DENOMINADO "ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".

PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ, DENOMINADO "DIVERSIDAD DE GÉNERO EN DURANGO".

PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR EL DIPUTADO ISRAEL SOTO PEÑA, DENOMINADO "DÍA DEL MIGRANTE".

15o.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA PARA SU TRÁMITE.

PRESIDENTE	SECRETARIO
TRÁMITE:	CIRCULAR No. 54 ENVIADA POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, COMUNICANDO ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE QUE FUNGIRÁ DURANTE EL
ENTERADOS.	PRESENTE MES.
TRÁMITE:	OFICIO S/N ENVIADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, COMUNICANDO ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE QUE FUNGIRÁ DURANTE EL SEGUNDO
ENTERADOS.	PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL.
TRÁMITE:	INICIATIVA ENVIADA POR EL C. DR. J. APOLONIO BETANCOURT RUIZ, MAGISTRADO
TÚRNESE A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.	·
	DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY
	ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO.
	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE DURANGO, ASÍ COMO POR EL C. DR. MANUEL VALADEZ DIAZ SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY

INICIATIVA PRESENTADA POR EL C. DIPUTADO OCTAVIO CARRETE CARRETE, QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO.

CC. SECRETARIOS DE LA LXVI LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E.-

El suscrito Diputado Octavio Carrete Carrete, integrante de la LXVI Legislatura, con las facultades que me confiere el artículo 78 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y el 171 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, nos permitimos presentar INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO que contiene reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La norma jurídica se encuentra sujeta a cambios, cambios que aseguran su acoplamiento con la realidad que se vive, aun así y dado que existe diversidad de normas que regulan una misma situación, se corre el riesgo de encontrar antinomias que hacen confusa la aplicación o interpretación de alguna norma.

Resulta pues una obligación del Legislador promover las reformas necesarias que eviten oscuridad o ambigüedad en una normatividad; por lo que, a fin de corregir antinomias, señalamos que el artículo 75 de la Ley Fundamental del Estado determina que, cuando lo acuerden las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso en la sesión relativa, la sede del Poder Legislativo podrá ser trasladada; ahora bien, el párrafo segundo del numeral 4 de la Norma Orgánica del Congreso señala que el cambio de sede deberá ser autorizada por el voto de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura.

Como puede verse, lo establecido tanto en el numeral constitucional como en el legal se encuentra una contradicción, dado que el computo para obligar el cambio provisional de sede del Congreso no se sujeta a la misma regla de votación y el resultado no puede ser el mismo debido a que el artículo constitucional precisa que debe ser sobre la base de las dos terceras partes de sus miembros presentes en la sesión en que se trate y su diverso de la Ley Orgánica señala este computo debe hacerse con el voto de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura.

Precisado lo anterior, si bien es cierto las decisiones legislativas deben tener sustento principalmente en el texto constitucional, no se deben pasar por alto las adecuaciones a las leyes secundarias a fin de evitar las indeseables contradicciones o ambigüedades en la ejecución de las normas, por lo que, proponemos adecuar la Ley Orgánica del

Congreso a lo que señala la Constitución Política Local en lo relativo al cambio provisional de residencia del Poder Legislativo.

Ahora bien, por disposición constitucional el Congreso del Estado puede conceder distinciones u honores por servicios distinguidos prestados al Estado y la Nación, en los términos que señale la ley.

Sin duda alguna, esta disposición encuentra su fundamento doctrinario en lo que García Máynez denomino "sanción premial" o "el premio como medida jurídica", la cual tiende a fomentar el cumplimiento meritorio de las normas del derecho y, como toda medida jurídica, asume siempre la forma de una consecuencia normativa.

Pero al igual que lo hicimos en el caso previo, el deber del legislador se centra en realizar las adecuaciones que perfeccionen los actos de un poder, evitando contradicciones o tergiversaciones sobre dichos actos, por lo que los premios que esta representación popular otorgue, deben estar desprovistos de duplicidades que en un momento dado puedan causar confusiones entre los destinatarios de dicha consideración legislativa.

Así las cosas, proponemos derogar la fracción XI del numeral 292 de la Ley Orgánica del Congreso, mismo que hace referencia al Premio Estatal de Periodismo, ya que como lo hemos señalado, nuestra intención es evitar cualquier tipo de confusión con otra distinción señalada en esta misma Ley, como lo es la Medalla Francisco Zarco, la cual esta dirigida a condecorar a los periodistas locales, nacionales o extranjeros que con su trabajo hayan contribuido al fortalecimiento de la libertad de información.

Dejamos en claro que permanece incólume la facultad del Congreso Estatal para premiar a quien hace de la libertad de información y expresión un oficio, lo pretendido con esta derogación es evitar duplicidades o confusiones en el otorgamiento de consideraciones por parte de esta soberanía popular.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía para su análisis, discusión y en su caso, aprobación la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 4 y se deroga la fracción XI del artículo 292, ambos de
la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, para quedar como sigue:
Artículo 4

sus miembros presentes en la sesion en que se trate.	
ARTÍCULO 292	
I a X	
XI Se deroga	

El Congreso del Estado podrá trasladar su sede provisionalmente, cuando así lo acuerden las dos terceras partes de

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

ATENTAMENTE

Victoria de Durango., a 15 de diciembre de 2014.

DIP. OCTAVIO CARRETE CARRETE

INICIATIVA PRESENTADA POR EL C. DIPUTADO PABLO CESAR AGUILAR PALACIO, QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.

CC. SECRETARIOS DE LA LXVI LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E.-

El suscrito Diputado Pablo Cesar Aguilar Palacio, integrante de la LXVI Legislatura, con las facultades que me confiere el artículo 78 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y el 171 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito presentar INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO que contiene reforma a la Ley que Crea el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La evaluación del desempeño de las políticas públicas y programas presupuestarios, con inclinación al uso racional y óptimo de los recursos públicos, y con miras a la obtención del presupuesto basado en resultados, es una tarea encomendada al Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango. Organismo que genera información necesaria, para que los entes públicos conciban y ejecuten mejores políticas públicas y programas.

Asimismo, la prestación de un servicio eficiente y de calidad, en el marco de la autonomía, transparencia y rendición de cuentas, en conjunto con la promoción de la cultura de evaluación y calidad de las políticas públicas, es tarea del Instituto señalado con anterioridad.

Es pertinente mencionar que, el diseño de una estrategia no es tarea de una sola persona u organización, sino que se requiere de un conjunto de actores, que interactúen conforme a los ordenamientos, obteniendo con ello una Política Pública que logre beneficios convergentes a todos los involucrados, en un ámbito de legalidad, establecido para cumplir con el deber constitucional del que emana la legislación de mérito. De ahí que, en el marco constitucional establecido, para que la ejecución de las políticas y programas verifiquen los criterios establecidos en los supuestos mencionados por la norma jurídica, es decir, en forma eficiente y de calidad, es cierto el otorgamiento que en el instrumento jurídico pertinente se establece, de facultades asignadas al Instituto de Evaluación de Políticas Públicas.

Por tal motivo, es necesario recalcar que en nuestro Estado, la evaluación de las políticas públicas se concretiza con la creación de un Organismo Autónomo a nivel constitucional, para llevar a cabo las funciones inherentes a ello; como

un modelo de avanzada que propicie un proceso de evaluación libre de influencia, con una regulación legal, que permita la correcta cumplimentación de las tareas encomendadas por la Constitución Política local.

Ahora bien, uno de los motivos de la presente iniciativa, estriba en que el funcionamiento del andamiaje jurídico del Estado, debe ser en base a criterios homologados y armónicos, que permitan el correcto funcionamiento de la legislación, a efecto de que la aplicación, tanto en forma separada como en su conjunto, carezca de obstáculos que impidan la correcta actividad de las instituciones reguladas por la legislación local. En la especie, la Constitución Política Local, establece en su numeral 47, ciertas encomiendas en materia de Planeación, al Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, por lo que es pertinente, realizar una evaluación y ajuste integral al ordenamiento jurídico pertinente, para que su funcionamiento sea armónico, tanto en conjunto con la Ley que Crea el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, como cada una de las legislaciones en el campo de su aplicación.

En tal virtud, se hace menester una evaluación y adecuación normativa tendiente a la optimización del engranaje legislativo, para que en consonancia con el andamiaje administrativo, se observen de forma irrestricta, y sobre todo optima el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, que se erigen como rectoras de la función y objeto del instituto de referencia; de ahí que se propone establecer como fecha de entrada en vigencia de la Ley de la Materia, el año 2016, a efecto de reforzar al Instituto en sus capacidades para que cumpla cabalmente con la tarea constitucional que se le ha encomendado, sin que haya necesidad de que una vez que haya entrado en funciones, se reforme o modifique algún ordenamiento o su estructura, por obstáculos legales como puede ser la contradicción o incompatibilidad de las leyes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía para su análisis, discusión y en su caso, aprobación la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo primero transitorio del decreto número 74, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango, el domingo 16 de febrero de 2014, que contiene la Ley que Crea el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, para quedar como sigue:

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor a los dos años de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

ATENTAMENTE

Victoria de Durango., a 15 de Diciembre de 2014.

Dip. Pablo Cesar Aguilar Palacio

INICIATIVA PRESENTADA POR EL C. DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX, QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY DE LOS TRABAJADORES DE LOS PODERES DEL ESTADO DE DURANGO.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS

LXVI LEGISLATURA DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE .-

El suscrito Diputado José Ángel Beltrán Félix, integrantes de esta Sexagésima Sexta Legislatura, en ejercicio de las atribuciones que nos confieren los artículos 78 fracción I de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango* y 171 fracción I de la *Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango*, por su conducto nos permitimos someter a la consideración del Honorable Pleno, Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene reforma a la *Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango*, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En fechas recientes, los tribunales laborales tanto federales como estatales se han pronunciado en el sentido de sostener el criterio de la existencia de la prima de antigüedad en la Ley estatal burocrática, partiendo de la interpretación hecha en base a argumentaciones doctrinales y constituyendo un derecho para los trabajadores que se retiran de manera voluntaria de sus funciones.

Ahora bien, si analizamos la naturaleza de los trabajadores que son regulados conforme al apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con su ley reglamentaria, es decir la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, puede ser observado que dicha prestación no se encuentra regulada, es decir, los trabajadores al servicio del Estado a nivel federal no poseen el derecho a la prima de antigüedad por no encontrarse en su legislación, situación que si ocurre con el apartado A) de la citada Constitución, sin embargo dada la naturaleza y las funciones desarrolladas el legislador federal no estableció dicho derecho para los burócratas.

Pese a lo manifestado, en nuestra legislación se estable que deberán pagarse a los trabajadores que se retiren voluntariamente del servicio, las primas que correspondan, provocando con ello el legislador una ambigüedad al no

establecer de manera indubitable a qué se refería con dicho supuesto, siendo entonces que los tribunales mencionados son los que dilucidan dicha cuestión acudiendo a la doctrina.

En efecto, es y será siempre obligación del Congreso del Estado de Durango, dentro de su función legislativa, establecer los supuestos normativos lo más claro posible a fin de otorgar la certeza jurídica que proporciona la norma, para que los gobernados y quienes tengan la competencia de aplicar la ley, cuenten con la visión clara respecto de la génesis del instrumento jurídico; es decir, que resulte patente el espíritu de la norma en la creación del legislador, evitando con ello, que los preceptos sean imprecisos, pues ello produciría ambigüedad y confusión.

Con ello, no quiere decir que la interpretación de la norma por los órganos competentes para realizarla e incluso la doctrina, no representen fuentes de derecho, pues esta situación se encuentra claramente precisada en nuestro sistema jurídico; sin embargo, es menester de este Congreso otorgar al pueblo de Durango una legislación clara, adecuada y acorde con el sistema jurídico del Estado y del país, armonizado con lo preceptuado por el apartado B) del numeral 123 constitucional y su ley reglamentaria.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía para su análisis, discusión y en su caso, aprobación de la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma la fracción X del artículo 55 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango; para quedar como sigue:

LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO DE DURANGO

ARTÍCULO 55.- Son obligaciones de las Dependencias y Entidades Administrativas, a que se refiere el Artículo 1º de esta Ley:

De la la la IX..

X Otorgar la prima vacacional.	
Al	RTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan a lo estipulado por el presente decreto.

ATENTAMENTE

Victoria de Durango, Dgo., a 15 de diciembre de 2014

Dip. José Ángel Beltrán Félix

INICIATIVA PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS FERNANDO BARRAGÁN GUTIÉRREZ Y RAÚL VARGAS MARTÍNEZ, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A MIGRANTES DEL ESTADO DE DURANGO.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXVI LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTES.—

Los suscritos Diputados, CC. Raúl Vargas Martínez, y Fernando Barragán Gutiérrez, integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango, en ejercicio de las facultades que nos confieren, los artículos 78 fracción I de la Constitución Política Local, y 171 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, por su conducto nos permitimos someter a la consideración del Honorable Pleno, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección a Migrantes del Estado de Durango y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace muchos años, el tema migratorio ha significado un punto central en la agenda pública y de derechos para nuestro país. Actualmente México, —como lo ha manifestado el documento preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México"— es un país de origen, tránsito, destino y, cada vez con mayor intensidad, de retorno de migrantes.

En este orden de ideas, ese espectro de categorías de migración ha implicado un desafío importante en el sentido de "cómo gestionar desde un enfoque de derechos humanos la afluencia de flujos migratorios mixtos".¹

El mismo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace notar que el corredor migratorio entre México y Estados Unidos es el de mayor flujo a nivel mundial, ya que Estados Unidos es el principal país de inmigración a nivel global, lo que supone un reto para nuestro país.

De este Modo, México enfrenta, entre otras realidades: ser un punto de paso de migrantes de centro y Sudamérica; ser, también, destino final de miles de migrantes internacionales; ser el país de origen de miles de migrantes (de acuerdo con datos de la División de Población de las Naciones Unidas, destacados en el informe ya citado de la CIDH, "de los 46 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos en la actualidad, se estima que cerca de 13 millones de estos migrantes provienen de México, lo cual significa que uno de cada tres migrantes en Estados Unidos es mexicano").

Por otro lado, nuestro país enfrenta el reto de políticas públicas orientadas a la protección e integración de los migrantes que retornan a territorio nacional (de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración entre 2008 y 2012 se llevaron a cabo 2,423,399 eventos de repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos); así como el tema de la migración y desplazamiento internos.

17

¹ Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México / [Preparado por la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos]. Pp. 27

Ante todas estas realidades, México y Durango han ido delineando marcos normativos y de políticas públicas para la protección a los derechos humanos de los diversos sujetos de la migración.

En este orden de ideas la presente iniciativa de reforma integral a la Ley de Protección a Migrantes del Estado de Durango, así como la reforma del artículo 39 fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, buscan contribuir a asegurar de manera efectiva la protección de los derechos de los migrantes, priorizando el gasto público a la protección real de los derechos, lo que conduce a definiciones de política pública abarcadoras, afinando el engranaje institucional para la atención de uno de los sectores fundamentales para nuestro país, como es el de migrantes.

En este sentido la Ley de Protección a Migrantes del Estado de Durango configura a la Dirección de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales como el principal órgano responsable de la protección de los migrantes en la entidad; bajo la óptica de asegurar el máximo uso posible de los recursos disponibles de la administración para la protección directa de derechos; criterio que se replica en la reforma del artículo 39 fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la determinación de este Honorable Congreso del Estado la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma de manera integral la Ley de Protección a Migrantes del Estado de Durango, para quedar en los siguientes términos:

LEY DE PROTECCIÓN A MIGRANTES DEL ESTADO DE DURANGO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social, y tiene por objeto proteger a los emigrantes y sus familias que por razones de carácter económico, educativo y social tienen que abandonar el territorio estatal; y a los inmigrantes que nacidos fuera del territorio estatal, han establecido su residencia en el Estado de Durango.

ARTÍCULO 2. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Dirección de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales, como un organismo público, adscrito al Despacho del Titular del Ejecutivo, con domicilio en la capital del Estado; a las dependencias estatales cuya competencia se refiera a su objeto; y a los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias.

También será de orden público e interés social la atención a los migrantes duranguenses, a sus familiares y a sus comunidades de origen; así como los programas y acciones que la Dirección realice en su beneficio.

ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

- I. Constitución: la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango;
- II. Deportado: Al duranguense expulsado de un país extranjero;
- III. Dirección: La Dirección de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales
- IV. Director General: el titular de la Dirección de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales;
- V. Ejecutivo: Al Titular del Gobierno del Estado de Durango;
- VI. Migrante: El duranguense o grupo de éstos que se han desplazado del territorio del Estado, para residir en forma temporal o permanente en el extranjero; independientemente de las causas que hayan originado el desplazamiento;
- VII. Inmigrado: Al extranjero que adquiere derechos de residencia definitiva en el país;
- VIII. Inmigrante: Al nacional que originario de otra entidad federativa, se establece de manera permanente en el territorio estatal, independientemente de su edad, sexo o actividad; y al extranjero que se interna legalmente en el Estado con el propósito de radicar en él, en tanto adquiere la calidad de inmigrado;
- IX. Ley: Ley de protección a Migrantes del Estado de Durango;
- X. No Inmigrante: Al extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país temporalmente como turista, transmigrante, visitante, ministro de culto o asociado religioso, asilado político, refugiado, estudiante, visitante distinguido, visitantes locales, visitante provisional o corresponsal;
- XI. Repatriado: Los emigrantes duranguenses que retornen al país con destino a su población natal, independientemente del tiempo que hayan residido en el extranjero;
- XII. Transmigrante: Al extranjero en tránsito por el territorio estatal hacia otro país; y
- XIII. Turista: Al extranjero autorizado por la autoridad migratoria para visitar el país, con fines de recreo o salud, para actividades artísticas, culturales o deportivas no remuneradas ni lucrativas, con temporalidad máxima de seis meses improrrogables, sin estar autorizado para realizar actividades económicas, políticas o sociales de cualquier tipo.
- ARTÍCULO 4. Quedan excluidos del régimen de esta Ley los asuntos de competencia federal señalados en la Ley General de Población y su Reglamento.
- ARTÍCULO 5. Son duranguenses las personas a las que alude el artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.

CAPÍTULO II DE LA MOVILIDAD HUMANA

Artículo 6.- La movilidad humana es la acción del derecho humano de toda persona a migrar, que incluye transformaciones positivas que disminuyan las desigualdades, inequidades y discriminación. No se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición, en tanto adquiere la calidad de inmigrado.

Artículo 7.- Se consideran personas en movilidad humana, independientemente de su condición migratoria a:

- Las personas que salen del Estado de Durango con la intención de asentarse de manera temporal o definitiva fuera de su territorio;
- II. Las personas mexicanas o extranjeras que llegan al Estado de Durango para:
 - a) Asentarse en ella con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva;
 - b) Las que por causa de cualquier tipo de violencia, o desastre natural buscan refugio o asilo en su territorio; y
 - c) Las que por causa de desplazamiento forzado, buscan protección.

Para el caso de las personas extranjeras, se deberá atender a las limitaciones que impongan las leyes en materia de migración.

Artículo 8.- En el Estado de Durango ninguna persona será objeto de discriminación o exclusión por su condición migratoria. El Gobierno del Estado apoyará la ejecución de programas y servicios con el objeto de promover la protección, acceso, ejercicio y defensa de sus derechos humanos.

Artículo 9.- El criterio de atención a familiares de migrantes, consiste en hacer posible el acceso a los programas y servicios del Gobierno del Estado de Durango, independientemente del lugar donde se encuentren sus migrantes.

CAPÍTULO III

DE LOS EMIGRANTES

ARTÍCULO 10. Independientemente de las atribuciones federales establecidas en la Ley General de Población, el Gobierno deberá establecer un programa permanente para disminuir los procesos de emigración y las acciones específicas de apoyo, promoción y protección, para lo que deberá:

A.

I. Investigar las causas que den o puedan dar origen a la emigración rural y urbana hacia el extranjero;

- II. Mejorar las alternativas de desarrollo y la creación de la infraestructura de servicios adecuada en el medio rural y urbano, asegurando la prestación de servicios de educación básica en las comunidades de más de 100 habitantes y los servicios de salud en las poblaciones mayores de 5,000 habitantes, en coordinación con las dependencias y entidades federales, estatales y municipales competentes, para arraigar en sus localidades de origen a las comunidades de migrantes o a los núcleos de población propensas a este fenómeno social;
- III. Coordinarse con las dependencias y entidades federales, estatales y los Ayuntamientos, para la creación y consolidación de oportunidades ocupacionales, la organización y funcionamiento de unidades productivas, cooperativas, integradoras, sociedades de producción y otras organizaciones económicas en las comunidades rurales, que les permitan lograr un mayor aprovechamiento de sus recursos naturales y culturales que generen arraigo y permanencia de los habitantes de las diversas localidades; y
- IV. En coordinación con las dependencias, entidades federales y estatales competentes y los Ayuntamientos, proporcionarán servicios sobre orientación y gestión de trámites, en materia de registro civil, derechos humanos, migración y servicio exterior, entre otros.

В.

- I. Establecer oficinas de representación en el extranjero que brinden apoyo a los migrantes;
- II. Establecer convenios y mecanismos de colaboración, apoyo y entendimiento con las autoridades locales del extranjero y consulares mexicanas;
- III. Suscribir convenios de colaboración con autoridades federales y de otras autoridades locales de otras entidades, organizaciones humanitarias, civiles, no gubernamentales y de carácter internacional en la materia;
- IV. Promover la agrupación de los emigrantes en asociaciones, federaciones, clubes u organizaciones similares;
- V. Promover la realización de obras públicas con la participación de emigrantes;
- VI. Establecer una línea telefónica gratuita que facilite la gestión de los trámites relativos al apoyo y protección de los emigrantes;
- VII. Establecer un portal electrónico que facilite la orientación, protección, apoyo, gestión de trámites y quejas de los emigrantes, así como facilitar la comunicación electrónica, y
- VIII. Promover el establecimiento de mecanismos que permitan las mejores condiciones en calidad, tiempo y precio en la transferencia de fondos provenientes del extranjero.

ARTÍCULO 11. La Dirección de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales, deberá atender a los migrantes duranguenses y sus familiares consanguíneos, que pudieran verse afectados por el fenómeno de la migración. Entendiendo, para los efectos de esta Ley, como beneficiarios, a todos aquellos ciudadanos duranguenses que radiquen fuera del territorio nacional por más de tres meses por año, que conserven familia consanguínea hasta el segundo grado en el territorio del Estado, y se encuentren en el extranjero por razones de trabajo.

Las personas que pretendan emigrar del país, además de las obligaciones que establece la legislación federal aplicable, comunicarán, de ser posible, a la Dirección o a los Ayuntamientos, la localidad donde pretenden establecerse, brindando la información que la autoridad estatal o municipal, en su caso, le requieran para fines estadísticos.

ARTÍCULO 12. Los menores de edad o las personas sujetas a interdicción, para realizar cualquier trámite migratorio, deberán presentarse acompañados por las personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela, en su caso; o acreditar el permiso concedido al efecto por dichas personas o por autoridad competente.

ARTÍCULO 13. La Dirección de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales y los Ayuntamientos realizarán una campaña permanente para informar a los duranguenses de los riesgos y peligros a que se pueden enfrentar, al emigrar sin cumplir todos los requisitos que para entrar al país a donde se dirijan exijan las leyes del mismo.

ARTÍCULO 14. No pueden emigrar las personas que estén sujetas a proceso judicial, sean prófugos de la justicia, estén arraigados por cualquier causa en virtud de resolución judicial o que así lo establezcan otras disposiciones aplicables en la materia, salvo que exista autorización emitida por autoridad competente.

El Gobierno y los Ayuntamientos podrán coadyuvar con la autoridad competente para evitar la emigración en los casos previstos en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 15. La Dirección de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales, cuando le sea solicitado, podrá auxiliar y representar a los duranguenses en la verificación de la autenticidad, capacidad económica y legalidad de las empresas, patrones o contratistas que pretendan contratar trabajadores duranguenses para realizar labores en el extranjero.

La Dirección podrá acudir a las autoridades laborales migratorias y otras competentes para obtener la información suficiente que garantice a los trabajadores las mejores condiciones de contratación.

Si el contrato en cuestión se extendiera en una lengua diferente al español, la Dirección podrá hacerlo traducir para proporcionarlo a cada uno de los trabajadores e informará a los mismos sobre los efectos legales correspondientes.

ARTÍCULO 16. El traslado en forma colectiva de los trabajadores duranguenses que sean contratados para laborar en un país extranjero, independientemente de las acciones que realice el gobierno federal, deberá ser vigilado por el Ejecutivo, a efecto de garantizar en todo momento el trato respetuoso y digno a los duranguenses.

CAPITULO IV

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN A MIGRANTES

ARTICULO17. En materia de Atención a Migrantes, la Dirección tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Formular al Ejecutivo el proyecto de políticas dirigidas a la atención de la problemática de los migrantes y sus familias; y someter a su consideración el programa anual de actividades, en el que se deberán incluir las políticas públicas, servicios y programas estatales y regionales, para el cumplimiento de los objetivos que se establecen en el presente ordenamiento legal;
- II. Plantear las políticas sociales para la protección de los migrantes durangueses en el extranjero;
- III. Formular y evaluar los programas y acciones destinadas a asegurar la atención a los migrantes y a sus familias, implementadas por las Instituciones del Estado y los Ayuntamientos;
- IV. Crear y operar, en coordinación con las autoridades indígenas, programas de protección a migrantes de las comunidades indígenas del Estado, así como de comunidades equiparables, estableciendo acciones para garantizar sus derechos laborales y mejorar sus condiciones de salud;
- V. Coadyuvar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes, y velar por el respeto de sus derechos humanos;
- VI. Impulsar programas orientados a crear conciencia en la sociedad y en las instituciones, sobre la importancia de los migrantes para nuestro Estado;

VII. Establecer, en conjunto con las autoridades municipales, programas de carácter permanente, así como proyectos sistemáticos en coordinación con la federación, en la búsqueda de soluciones y apoyos a la resolución de los problemas de migrantes, estableciendo al efecto programas interinstitucionales para la atención y protección de los migrantes y sus familias;

VIII. Será el órgano de apoyo, gestión y enlace de los migrantes con sus familias, así como con las instituciones públicas o privadas a que hubiere lugar;

IX. Impulsar de manera coordinada con los grupos organizados de duranguenses en el extranjero, la ejecución de acciones de beneficio social y el desarrollo de proyectos productivos en sus lugares de origen;

X. Informar a las familias de migrantes sobre la mejor administración o inversión de las remesas que éstos les envían, para que puedan mejorar sus condiciones de vida;

XI. Promover la producción cultural de artistas duranguenses y difundir las diversas culturas indígenas de la Entidad, así como la difusión de la cultura, las tradiciones y valores con que cuenta nuestro estado, en las comunidades de duranguenses radicados en el exterior;

XII. Instaurar acciones en coordinación con las dependencias, entidades e instancias competentes, tendientes a mejorar las condiciones de salud de las mujeres; y apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes;

XIII. Realizar investigaciones y estudios de manera permanente para instrumentar políticas públicas, tendientes a la atención de los migrantes;

XIV. Rendir al Poder Ejecutivo un informe anual sobre las actividades desarrolladas, señalando los programas aplicados, avances, metas y objetivos realizados, conforme a los fines que esta Ley establece;

XV. Crear un sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de los migrantes, y su repercusión en sus lugares de origen;

XVI. Coadyuvar en la constitución de grupos organizados de migrantes durangueses en el extranjero, y crear nexos con los ya existentes;

XVII. Organizar vínculos con las instituciones públicas nacionales y la sociedad civil, para la cooperación técnica y financiera destinada a la solución de los problemas de los migrantes;

XVIII. Realizar campañas permanentes en los medios de difusión, con el propósito de fortalecer la cultura de protección de los derechos de los migrantes;

XIX. Difundir y publicar, en los medios de comunicación información relacionada con sus fines;

XX. Realizar estudios sobre la legislación relacionada con los migrantes, y en su caso, proponer al Ejecutivo las iniciativas de ley o de reformas que considere necesarias, para garantizar la protección de los derechos de los migrantes;

XXI. Funcionar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de los poderes del Estado, de los ayuntamientos, así como de los sectores social y privado, en materia de migración; y otorgar asesoría en la materia a las personas que así lo requieran;

XXII. Promover ante las instancias competentes, la sanción a funcionarios y servidores públicos que abusen, despojen o extorsionen a migrantes; y promover especialmente en las temporadas de mayor afluencia de regreso o visita de migrantes al Estado, programas de difusión de los derechos de los migrantes y de la cultura de la legalidad;

XXIII. Proporcionar atención y protección a migrantes víctimas de delitos, y

XXIII. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.

CAPITULO V

DEL TRABAJO COORDINADO PARA LA ATENCIÓN A MIGRANTES

ARTICULO 18.La Dirección creará programas permanentes a fin de que de manera coordinada con los Ayuntamientos, se fomente una cultura de atención a duranguenses migrantes, por parte de las autoridades estatales y municipales.

ARTICULO 19. La Dirección promoverá, en coordinación con las dependencias competentes, la realización de operativos tendientes al buen tránsito de migrantes por el Estado, otorgando en el ámbito de su competencia, asesoría, asistencia y seguridad.

ARTICULO 20. La Dirección impulsará de manera coordinada con los grupos organizados de duranguenses en el extranjero, la ejecución de acciones de beneficio social y el desarrollo de proyectos productivos en sus lugares de origen, con la finalidad de promover el regreso de los duranguenses residentes en el extranjero a sus localidades, así como brindar atención a sus familiares que permanecen en el Estado, apoyándolos en actividades productivas y sociales.

Las operaciones a que se refiere el presente artículo se ejecutarán en coordinación con las Secretarías y Entidades que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, cuenten con las atribuciones necesarias.

ARTICULO 21. La Dirección deberá impulsar la creación, en los Ayuntamientos de los municipios que se consideren generadores de migrantes, de una comisión especial para su atención.

ARTICULO 22. La Dirección, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, apoyándose en las embajadas o consulados nacionales, dará seguimiento y en su caso, gestionará ante la instancia competente la asistencia legal a duranguenses que por alguna razón estén siendo sujetos a algún procedimiento jurisdiccional del orden penal fuera de nuestro país.

ARTICULO 23. La Dirección deberá impulsar el establecimiento, en los Ayuntamientos de los municipios que se consideren generadores de migrantes, de líneas telefónicas gratuitas, portales electrónicos que faciliten la atención de los trámites de apoyo y protección de los migrantes, así como para facilitar la comunicación por medios electrónicos.

ARTICULO 24. La Dirección implementará programas de carácter permanente, que permitan asistir legal y económicamente a los familiares de migrantes que lo soliciten y que tengan necesidad de transportar cadáveres de éstos hacia el territorio del Estado. Además, deberá brindarle las facilidades necesarias para que se realice el acto en un marco de dignidad y respeto.

ARTICULO 25. La Dirección gestionará que las dependencias del Ejecutivo y los Ayuntamientos, otorguen toda clase de facilidades a los migrantes y sus familias para la obtención y envío de documentos oficiales, de identidad, estudios, propiedad y otros de carácter público que les sean necesarios.

CAPÍTULO VI

DE LA REPATRIACIÓN Y DEPORTACIÓN

DE EMIGRANTES DURANGUENSES

ARTÍCULO 26. La Dirección de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales coadyuvará con las autoridades federales competentes y con los municipios a petición de éstas, para la repatriación de mexicanos que conforme a sus conocimientos o capacidades puedan contribuir al desarrollo del Estado.

ARTÍCULO 27. La Dirección de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales coadyuvará con los demás organismos federales y municipales que correspondan, para distribuir en los centros de población existentes y en los que se creen, a los contingentes de repatriados que en forma colectiva se internen al país, en los términos de los artículos 83 y 84 de la Ley General de Población, cuidando en todo momento que se garanticen las prestaciones de los servicios públicos, el acceso a los servicios educativos básicos y de salud a la población residente, deportados y repatriados.

ARTÍCULO 28. Cuando un duranguense sea deportado de un país extranjero, la Dirección de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales y los Ayuntamientos, conforme a sus posibilidades, podrán contribuir con un porcentaje del costo de traslado de su persona a la población de origen, en los términos del Capítulo VII de esta Ley.

ARTÍCULO 29. Para ser sujeto a los beneficios señalados en el artículo anterior, la Dirección de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales deberá verificar ante las autoridades consulares mexicanas, la fecha, hora y motivo de la deportación. De no estar registrado este suceso por las autoridades consulares, no será sujeto del beneficio señalado.

ARTICULO 30. Cuando la causa de deportación haya sido la comisión de un delito grave que amerite pena corporal, los beneficios señalados en Capítulo IV de esta Ley no serán aplicables para el deportado.

De manera excepcional, la autoridad correspondiente podrá brindar los beneficios señalados.

ARTÍCULO 31. Cuando un duranguense, haya cometido un delito en el extranjero o en el país y sea extraditado conforme a los tratados internacionales vigentes y la legislación penal aplicable, la Dirección de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales, de acuerdo por lo establecido en el artículo 4 de la presente Ley, podrá vigilar que la entrega entre las autoridades correspondientes se realice salvaguardando sus derechos a un trato digno y humano, para lo que podrá solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, según sea el caso, sin que esto ponga en riesgo la seguridad y confidencialidad de las acciones.

ARTÍCULO 32. Cuando un duranguense en el extranjero cometa un delito y sea sentenciado a una pena privativa de su vida, la Dirección de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores su intervención oficial para solicitar clemencia, en los términos de la legislación aplicable.

CAPÍTULO VII

DE LA ASISTENCIA SOCIAL AL EMIGRANTE

ARTÍCULO 33. Para poder acceder al beneficio de la asistencia social, además de los requisitos señalados en esta Ley, se deberá:

I. Demostrar la condición de duranguense del beneficiado; y

II. Demostrar que cuenta con un domicilio en el Estado de Durango, en términos de la ley.

ARTÍCULO 34. Las autoridades del Estado de Durango brindarán apoyo, en la medida de las disposiciones presupuestales, a los duranguenses localizados temporal o definitivamente en el extranjero que requieran el auxilio de las autoridades, para:

- I. Ser trasladados a una localidad del Estado en caso de deportación;
- II. El traslado de cadáveres de duranguenses fallecidos en el extranjero;
- III. Brindar auxilio en caso de situaciones excepcionales; y
- IV. El trámite de documentos oficiales.

ARTÍCULO 35. La solicitud de apoyo o asistencia a un emigrante duranguense podrá ser tramitada por un pariente directo de él o de su cónyuge, por la autoridad consular mexicana o por las autoridades municipales donde se localicen puestos fronterizos, puertos y aeropuertos, donde eventualmente se localice el emigrante.

SECCIÓN PRIMERA

DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN CASOS DE DEPORTACIÓN

ARTÍCULO 36. El emigrante o quien realice la solicitud de apoyo, conforme al artículo 35 de esta Ley, deberá demostrar que el beneficiario radicaba en el extranjero y no fue deportado por las causales señaladas en el artículo 30 de este mismo instrumento.

ARTÍCULO 37. El Estado, y en su caso, el municipio, establecerán los mecanismos, conforme a la disponibilidad presupuestal, para brindar asistencia social a los duranguenses que hayan sido deportados, la que podrá ser:

- I. En efectivo, cubriendo una parte porcentual del costo de transportación del beneficiario hasta la localidad de residencia dentro del Estado;
- II. En especie, conviniendo con las empresas que brindan el servicio de transporte de pasajeros, las facilidades para que el beneficiario se traslade en un solo trayecto continuo desde el punto fronterizo, puerto o aeropuerto donde haya sido deportado, hasta la localidad de residencia dentro del Estado; y
- III. En gestión ante autoridades locales y federales del punto fronterizo, puerto o aeropuerto donde haya sido deportado, para que pueda recibir apoyos asistenciales en tanto se realiza su traslado a la entidad.

ARTÍCULO 38. Cuando la solicitud de apoyo no provenga de la autoridad consular mexicana, se podrá actuar conforme a lo previsto en el artículo 28 de esta Ley. En todo caso, la deportación del beneficiario no deberá de haber ocurrido en un tiempo mayor a ocho días naturales al momento de presentarse la solicitud.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA REPATRIACIÓN DE CADÁVERES

ARTÍCULO 39. Cuando un duranguense fallezca en el extranjero, las autoridades estatales y municipales, en su caso, y conforme al ámbito de su competencia, deberán brindar todas las facilidades para el trámite de la documentación oficial que les sea requerida.

ARTÍCULO 40. Los deudos de un duranguense fallecido en el extranjero, podrán solicitar al Estado y al municipio, según sea el caso, se les brinde asesoría para la realización de los trámites de internación al territorio nacional, a fin de sepultarlo en el país.

La Dirección, a requerimiento de los deudos o de las autoridades consulares, podrá apoyar económicamente en el proceso de traslado e inhumación.

Si la inhumación se realizara en un panteón del territorio estatal, además podrá brindarle las facilidades necesarias para que se realice el acto en un marco de dignidad y respeto.

ARTÍCULO 41. La transportación de cadáveres y restos áridos, deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en la normatividad aplicable.

ARTÍCULO 42. Si el cuerpo de un duranguense fallecido en el extranjero no fuera entregado de manera inmediata a sus familiares por la autoridad local, derivado de las circunstancias en que haya ocurrido la muerte, el Gobierno solicitará a las autoridades consulares mexicanas su intervención para garantizar que el cuerpo reciba un trato digno y respetuoso.

SECCIÓN TERCERA

DE LA AYUDA HUMANITARIA A EMIGRANTES

ARTÍCULO 43. Cuando un emigrante duranguense sufra de una enfermedad grave que requiera cuidados especiales y carezca de los recursos económicos suficientes para su tratamiento en el extranjero, podrá solicitar a la Dirección, apoyo para ser trasladado a la ciudad de Durango. La Dirección de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales promoverá las condiciones necesarias, para que una vez que se encuentre en el Estado, sea canalizado a las instituciones de salud.

ARTÍCULO 44. Para ser sujeto de los beneficios señalados en el artículo anterior, el beneficiario deberá presentar:

- I. Solicitud, explicando el motivo, alcance y naturaleza del apoyo solicitado; y
- II. Constancia médica expedida por una institución pública o privada, en la que señale las características y naturaleza de la enfermedad, certificada por la autoridad consular mexicana.

ARTÍCULO 45. Cuando ocurra un desastre natural o urbano, un atentado terrorista o accidentes colectivos que afecten o pongan en peligro la vida o el patrimonio de los duranguenses en el extranjero, el Estado, coordinadamente con la

Secretaría de Relaciones Exteriores, promoverá las acciones necesarias para salvaguardarles, procurándoles refugio temporal y asistencia médica y/o social, e incluso, en su caso, facilitándoles los medios para retornar al Estado de Durango.

ARTÍCULO 46. Cuando un duranguense sea condenado a prisión en el extranjero, el Estado podrá brindarle ayuda humanitaria a su familia dependiente, para que pueda retornar al Estado de Durango, si así es su deseo.

SECCIÓN CUARTA

DE LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 47. La Dirección de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales podrá realizar trámites de documentación oficial para duranguenses radicados en el extranjero, siempre y cuando éstos no requieran que su realización se efectúe de manera personal. El costo del trámite y los derechos que éste cause, deberán ser cubiertos previamente por el solicitante.

ARTÍCULO 48. A los emigrantes que sean sujetos de una sanción administrativa en su tránsito de internamiento al Estado o retorno al extranjero, no se les podrá retirar documentos de identidad, licencias o placas de sus vehículos; solamente se les podrá levantar la infracción en los casos siguientes:

- I. Cuando el infractor esté establecido temporalmente en el municipio donde causó la infracción o sanción, deberá cubrirlo en las ventanillas que para el efecto disponga el municipio;
- II. Cuando el infractor se encuentre en tránsito hacia o desde otro municipio, pero dentro de la entidad, podrá liquidar la infracción mediante depósito bancario, o en las cajas de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno, la cual transferirá el monto del pago a los recursos del municipio correspondiente; y
- III. Cuando el infractor se encuentre en tránsito de retorno al extranjero, o en tránsito a otra entidad, podrá realizar el pago de la infracción correspondiente mediante depósito bancario.

La falta de pago de infracciones y sanciones administrativas, podrá ser requerida mediante las acciones fiscales que el Estado y cada municipio disponga, o podrá requerírsele a través de la autoridad consular o migratoria del país donde se localice.

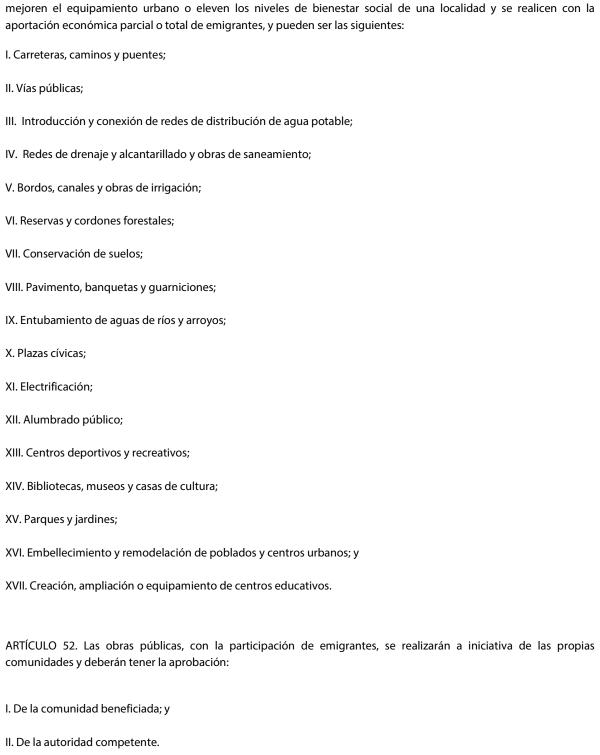
ARTÍCULO 49. El Estado coadyuvará con el gobierno federal y los municipios, en la realización de programas temporales o permanentes de atención y orientación a emigrantes, en aeropuertos, centrales de autobuses y carreteras.

CAPÍTULO VIII

DE LAS OBRAS PÚBLICAS CON LA PARTICIPACIÓN DE EMIGRANTES

ARTÍCULO 50. El Estado y los municipios, y en conjunto con el gobierno federal, podrán participar en la realización de obras públicas con la participación de emigrantes.

ARTÍCULO 51. Se consideran obras públicas con la participación de emigrantes, aquéllas que directa o indirectamente



ARTÍCULO 53. Para la aprobación de una obra pública con la participación de emigrantes, realizadas a iniciativas de éstos o por las propias comunidades, deberán contar previamente con lo siguiente:

- I. Proyecto y presupuesto de la obra pública;
- II. Estudio de impacto ambiental, si se requiere;
- III. Manifestación de impacto ambiental, si se requiere;
- IV. Monto de la participación económica del emigrante o grupo de emigrantes participantes, señalando claramente plazo y forma de la aportación; y
- V. Importe líquido e individualizado, de lo que le corresponde pagar a cada uno de los beneficiados con la obra pública, en su caso, señalando claramente plazo y forma de la aportación.

ARTICULO 54. El Ayuntamiento dará a conocer a los vecinos, colonos o asociaciones de éstos, agrupaciones cívicas, culturales, artesanales, y en general, a los ciudadanos que resulten beneficiados con la ejecución de una obra pública con la participación económica de emigrantes, la naturaleza de ésta, su objetivo y las razones socioeconómicas y estudios realizados a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo anterior, para obtener la aprobación por la comunidad de una obra pública como lo señala la fracción I del artículo 52; y en su caso, definir el monto de la aportación que los beneficiarios aportarán en los términos de la fracción V del artículo anterior, lo que se hará constar en actas que al efecto el Ayuntamiento levante, la que deberá contener además, el nombre y firma de los asistentes; sus efectos tendrán fuerza legal y obligatoriedad para todos y cada uno de los vecinos beneficiados con la obra pública, aún para los no presentes pero que reporten beneficios en términos de esta Ley.

ARTÍCULO 55. El Ayuntamiento oirá y considerará a todos los beneficiados con la obra pública y, en su caso, discutirá y deliberará acerca de los proyectos, aportaciones, costos y en general, todo lo relacionado con ésta.

ARTÍCULO 56. Las obras públicas realizadas con aportaciones económicas de emigrantes y los beneficiarios, que requieran de la participación económica de los municipios, el gobierno federal o del estatal, deberán además cumplir con las normas, procedimientos y reglas de operación que cada uno de los órdenes de gobierno fijen. La Dirección de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales, a través de sus oficinas de representación en el extranjero, asesorará a los migrantes u organizaciones que lo soliciten.

CAPÍTULO IX

DE LOS TRANSMIGRANTES Y LOS TURISTAS

ARTÍCULO 57. Los transmigrantes y los turistas que se encuentren en territorio estatal, tienen derecho a recibir un trato justo y humano, prohibiéndose cualquier acto de discriminación, xenofobia, antisemitismo, anti islamismo, segregación, exclusión o restricción por razón de su origen étnico, social, religioso o nacionalidad y cualquiera otra conducta que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos y libertades fundamentales del ser humano.

ARTÍCULO 58. Los transmigrantes de probados escasos recursos económicos, y excepcionalmente los turistas que se encuentren en territorio estatal, tienen derecho a recibir:

I. Atención médica de emergencia en los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado o de los Municipios;

- II. Atención materno infantil, ginecológica y de posparto en los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado o de los Municipios;
- III. Atención de medicina preventiva en los centros de salud y consultorios de la Secretaría de Salud del Estado y los Municipios;
- IV. Hospedaje, cobija y comida hasta por tres días en los albergues públicos del Estado y/o Municipios;
- V. Asesoría sobre orientación y gestión de trámites, derechos humanos, migración y servicio exterior, que brindará la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y las oficinas de atención a migrantes del Estado y los Municipios; y/o
- VI. Asistencia legal que le proporcionará la Secretaría General de Gobierno del Estado.

ARTÍCULO 59. Las autoridades correspondientes fijarán la cuota de recuperación que se considere aplicable para otorgar los derechos señalados en el artículo anterior, previo estudio de trabajo social, con excepción de los señalados en las fracciones I, II, V y VI que serán gratuitos, siempre y cuando el beneficiario se encuentre en estado de insolvencia o escasos recursos económicos.

En todos los casos, se deberá actuar de manera humanitaria, anteponiendo la salvaguarda de los derechos fundamentales del ser humano.

Los turistas podrán ser beneficiarios de los derechos señalados en las fracciones I, II, III, V y VI del artículo anterior, en cuyo caso las autoridades correspondientes fijarán la cuota de recuperación que se considere aplicable.

ARTÍCULO 60. Cuando un transmigrante o un turista sea detenido por la autoridad estatal o municipal, por la comisión de un delito o faltas administrativas, se notificará a la autoridad federal, que conocerá de su situación legal y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos vigilará que reciba un trato digno y humanitario.

Si se siguiese un juicio privativo de la libertad en su contra, la Dirección informará, mediante comunicado oficial, a su familia, en el domicilio que el acusado señale, de la situación legal y el estado del juicio que enfrenta.

ARTÍCULO 61. Ningún transmigrante o turista puede ser detenido en el territorio estatal por una autoridad estatal o municipal, por la sola presunción de su condición migratoria. Para su identificación, basta la presentación de credencial o identificación oficial de una institución o dependencia oficial nacional o extranjera; pasaporte o matrícula consular.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- El personal, los recursos y asuntos pendientes que corresponden al Instituto de Atención a Migrantes del Estado de Durango, pasarán a formar parte de la Dirección de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 39 fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, para quedar como sigue:

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO

CAPITULO III DE LOS ÓRGANOS ADSCRITOS AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

ARTICULO 39.
El Gobernador del Estado, podrá contar, además con los siguientes órganos adscritos a su Despacho
De la I a la VI
VII. Dirección de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales;
De la VIII a la XII

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dip. Fernando Barragán Gutiérrez

Dip. Raúl Vargas Martínez

Dip. Rosauro Meza Sifuentes

Dip. Agustín Bernardo Bonilla Saucedo

INICIATIVA PRESENTADA POR EL DIPUTADO AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LOS CÓDIGOS PENALES DEL ESTADO DE DURANGO.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS

LXVI LEGISLATURA DEL H.

CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE .-

El suscrito, Diputado **Agustín Bernardo Bonilla Saucedo**, integrante de esta Sexagésima Sexta Legislatura, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 78 fracción I de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango* y 171 fracción I de la *Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango*, por su conducto me permito someter a la consideración del Honorable Pleno, **Iniciativa con Proyecto de Decreto** que contiene **reforma** a los artículos 386, 387 y 388 del *Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango*, aprobado mediante Decreto 338 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 335, de fecha 29 de abril de 2004, y a los artículos 178, 179 y 181 del *Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango*, aprobado mediante Decreto 284, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, No. 48, de fecha 14 de junio de 2009, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La libertad y seguridad sexual representan derechos que el Estado debe proteger de manera prioritaria, pues la invasión a la esfera personal derivada de actos como el abuso sexual y el estupro, constituye una afectación grave al ser humano, ya sea física o psicológica, que incluso produce efectos de manera posterior a la comisión del hecho ilícito.

Cabe destacar que es obligación del legislador, quien en el ejercicio de la democracia directa es elegido para representar los intereses de la población,

escuchar los reclamos, peticiones y las más sentidas demandas del pueblo, y que ello derive en la propuesta de modificaciones normativas que provean de una mayor y mejor protección de los intereses de los habitantes.

Por otro lado, cuando el legislador realiza el estudio y análisis de las normas jurídicas, y en este caso, de la norma penal sustantiva; debe hacerlo con alto sentido de responsabilidad, pues al plantear la penalidad para los delitos, debe considerar de manera general: la conducta, los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo penal, la antijuridicidad, además de la culpabilidad; sin embargo, baste para ejemplificar la relevancia del estudio a que se hace alusión, que se debe examinar de manera especial: el bien jurídico protegido, la afectación directa e indirecta producida al sujeto pasivo, el grado de culpabilidad, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar, entre muchos otros elementos.

Es por lo anterior, que estimo necesario realizar una modificación a nuestros Códigos Penales vigentes en el Estado, a fin de hacer congruente la norma penal sustantiva para el caso de los denominados delitos sexuales, teniendo en cuenta el daño que se causa a las víctimas directas e indirectas; esto mediante el incremento de la pena de prisión y de la multa para las conductas de abusos deshonestos y abuso sexual, que aunque se refieren a una misma conducta delictiva, se les denomina diferente en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, aprobado mediante Decreto 338 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 335, de fecha 29 de abril de 2004, y el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, aprobado mediante Decreto 284, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, No. 48, de fecha 14 de junio de 2009, respectivamente; así como el caso del tipo penal denominado estupro, pues en ambas conductas la sanción establecida es muy baja, proponiendo a través de esta iniciativa realizar un aumento para el caso de la pena privativa de la libertad en prácticamente el doble, y en el caso de las multas homologar ambos códigos, conservando la más alta. Este proyecto tiene por finalidad ser congruentes con los argumentos expuestos, pues considerar incrementar las penas que se encuentran establecidas para estos delitos, no debe resultar inarticulado entre uno y otro tipo penal.

Se debe recordar que el derecho penal obedece a dos finalidades generales: la primera, enfocada a la prevención de los delitos mediante la amenaza de la sanción, y en segundo lugar, a la represión de los delitos mediante la imposición de las penas y las medidas de seguridad.

No obstante lo anterior, resulta necesario precisar que las modificaciones a las normas jurídicas no deben obedecer a capricho alguno, sino que deben provenir de un análisis responsable y consciente, incluso acorde a las nuevas determinaciones y preceptos en materia procedimental que se encuentran contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que en el caso del Estado de Durango, nos encontramos en plena transición del sistema inquisitivo al acusatorio, al contar ya en el primer, segundo y tercer distritos judiciales en plena vigencia el referido ordenamiento, así como en el ámbito federal en todo el territorio estatal, en este último caso, desde el pasado 24 de noviembre.

Cabe señalar que el nuevo sistema de justicia penal tiene como finalidad la adecuada investigación de los hechos delictivos, el correcto procesamiento y por supuesto, la imposición de la sanción correspondiente, siempre procurando que el culpable no quede impune. Ello se traduce en mejores condiciones jurídicas que permiten agilidad, certidumbre, respeto irrestricto a los derechos de las partes, un combate frontal a la corrupción y una verdadera impartición de justicia.

Es claro que representa un deber del legislador, el proveer a los órganos encargados de la administración y procuración de justicia de las herramientas necesarias para la persecución de los delitos y la imposición de las sanciones. Pero aún de mayor importancia considero que son las acciones encaminadas a proteger y hacer valer el derecho de las víctimas para que puedan acceder a la justicia, al derecho a la verdad y a la reparación del daño; en este último caso de relevancia total, pues, una vez que un individuo ha sido violentado en su esfera jurídica mediante la comisión de un hecho delictivo en donde se vulnera la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual, requiere ineludiblemente recuperar su salud física y emocional.

Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de esta Honorable Legislatura, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 386, 387 y 388 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, aprobado mediante Decreto 338, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 335, de fecha 29 de abril del 2004 para quedar como sigue:

SUBTÍTULO CUARTO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INEXPERIENCIA SEXUAL

CAPÍTULO PRIMERO ABUSOS DESHONESTOS

ARTÍCULO 386.- Al que sin el consentimiento de una persona, ejecute en ella o la haga ejecutar uno o varios actos de naturaleza sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, se le impondrá prisión de uno **a cuatro años y multa de setenta y dos a doscientos dieciséis días de salario.**

Si se hiciera uso de violencia física o moral, la pena será de tres **a siete años de prisión y multa de doscientos** dieciséis a trescientos sesenta días de salario.

ARTÍCULO 387.- Al que ejecute un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, en una persona menor de doce años o en persona que **no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que** por cualquier causa

no pueda resistirla, o la obligue a ejecutarla, se le impondrá una pena de tres **a nueve años de prisión y multa de** doscientos ochenta y ocho a cuatrocientos treinta y dos días de salario.

CAPÍTULO SEGUNDO ESTUPRO

ARTÍCULO 388.- Se impondrá de seis meses **a cinco años de prisión y multa de treinta y seis a doscientos ochenta y ocho días de salario**, al que tenga cópula con una **persona** mayor de catorce años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de seducción o engaño.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 178, 179 y 181 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, aprobado mediante Decreto 284, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango No. 48, de fecha 14 de junio de 2009 para quedar como sigue:

CAPÍTULO II ABUSO SEXUAL

Artículo 178.

Al que sin el consentimiento de una persona, ejecute en ella o la haga ejecutar uno o varios actos de naturaleza sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de setenta y dos a doscientos dieciséis días de salario.

Si se hiciera uso de violencia, la pena será de tres a siete años de prisión y multa de doscientos dieciséis a trescientos sesenta días de salario.

Artículo 179.

Al que ejecute un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, en una persona menor de doce años o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirla o la obligue a ejecutarla, se le impondrán de cuatro **a nueve años de prisión y**

multa doscientos ochenta y ocho a cuatrocientos treinta y dos días de salario.

CAPÍTULO III ESTUPRO

Artículo 181.

Se impondrá de seis meses **a cinco años de prisión y multa de treinta y seis a doscientos ochenta y ocho días de salario**, al que tenga cópula con una persona mayor de catorce años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio del engaño.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan a lo estipulado por el presente Decreto.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCIÓN

Victoria de Durango, Dgo., a 15 de Diciembre del 2014

DIP. AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO

LECTURA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, QUE CONTIENE DEROGACIONES A LOS CÓDIGOS PENALES VIGENTES EN EL ESTADO Y REFORMA INTEGRAL DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE DURANGO.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión Justicia, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por los C. C. Diputados Eusebio Cepeda Solís, Rosauro Meza Sifuentes, Anavel Fernández Martínez, José Ángel Beltrán Félix, Agustín Bernardo Bonilla Saucedo y Alicia García Valenzuela integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, mediante la cual se derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, aprobado por Decreto 338 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango, número 35, de fecha 29 de abril de 2004, así como del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, aprobado mediante Decreto 284 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango, número 48, de fecha 14 de junio del año 2009; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de la Trata de Personas en el Estado de Durango; por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, 103, 123, 176, 177, 178 y demás relativos a la *Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango*, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, con base a los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Después de un análisis detallado de la presente propuesta, se encuentra que la misma tiene como objeto, derogar diversas disposiciones de los Códigos Penales vigentes en el Estado de Durango, toda vez que en materia de trata de personas, las entidades federativas no tienen competencia para legislar, lo anterior se sustenta en los artículos 73, fracción XXI, inciso a); 124 de la Constitución Federal, y 2, fracción II de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, los cuales establecen que es facultad exclusiva de la federación, fijar los tipos penales y sanciones relativas a los delitos en materia de trata de personas.

SEGUNDO. Así mismo la presente iniciativa pretende hacer una reforma integral a la Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de la Trata de Personas en el Estado de Durango, tomando en cuenta que cumpliendo el mínimo normativo que marca la Ley General, las Leyes Locales pueden tener su propio ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región específica esto, con base en el artículo 5 de la Ley General.

Por lo anterior es obligación de los legisladores, instaurar en la legislación local, las facultades de investigación y actuación para las autoridades, con el propósito de crear una investigación delictiva efectiva que combata

fehacientemente a los sujetos activos de los delitos en materia de trata de personas, por ello se propone la adición de un capítulo tercero denominado "De las Facultades de Investigación de las Autoridades Estatales", el cual otorga a los Ministerios Públicos y a las Policías facultades como: la intervención de comunicaciones, la solicitud de información a empresas telefónicas, la autorización de seguimiento de personas, entre otras, herramientas necesarias para la efectiva investigación, todo ello en términos de lo establecido en la legislación federal y local aplicable.

TERCERO.- En la misma tesitura se propone dar la atribución al órgano interinstitucional, de monitorear y vigilar permanentemente que los anuncios clasificados que se publiquen por cualquier medio en territorio estatal, sean establecidos conforme a los lineamientos que emita el Gobierno Federal, esto con la intención de detectar y combatir posibles lugares y/o personas que cometan el delito de trata de personas.

CUARTO.- En otro orden de ideas, se propone que se impulse la elaboración de los planes para que las autoridades competentes instauren, albergues y casas de medio camino con servicios integrales a víctimas de los delitos de trata de personas, ya que lo anterior es de competencia concurrente, según lo establece el artículo 62 de la Ley General en la materia, el cual claramente señala que las autoridades responsables deberán proveer la debida protección y asistencia en albergues durante su recuperación, rehabilitación, y resocialización, así como los lugares adecuados para garantizar su seguridad.

En base a lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima que la iniciativa cuyo estudio nos ocupa, es procedente, con las adecuaciones realizadas a la misma, lo anterior, con fundamento en lo que dispone el artículo 182 último párrafo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, en virtud de considerar que las mismas, obedecen al mejoramiento de forma y fondos jurídicos, así mismo nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y aprobación correspondiente en su caso, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Se derogan los artículos 303, 304 y 305 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el catorce de junio del año dos mil nueve, para quedar como sigue:

Artículo 303. Derogado.

Artículo 304. Derogado.

Artículo 305. Derogado.

ARTICULO SEGUNDO: Se derogan los artículos 290, 291, 293, 294, 295, 297, 298 y 299 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, el jueves veintinueve de abril del año dos mil cuatro, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 290.- Derogado.

ARTÍCULO 291.- Derogado.

ARTÍCULO 293.- Derogado.

ARTÍCULO 294.- Derogado.

ARTÍCULO 295.- Derogado.

ARTÍCULO 297.- Derogado.

ARTÍCULO 298.- Derogado.

ARTÍCULO 299.- Derogado.

ARTICULO TERCERO: Se elabora una reforma integral de la Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de la Trata de Personas en el Estado de Durango, para quedar como sigue:

LEY PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE DURANGO

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, se aplicará en todo el territorio del Estado de Durango y tiene por objeto, la prevención, atención y erradicación del delito de trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas del mismo, a fin de garantizar el respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y el fortalecimiento de acciones tendentes a erradicar de forma definitiva la trata de personas, mediante el fomento de la participación social en las políticas, programas y acciones institucionales en torno a las acciones de combate frontal al delito.

Esta ley define las responsabilidades de las instituciones públicas encargadas de las políticas de prevención, atención, combate y erradicación de la trata de personas en el Estado de Durango.

ARTÍCULO 2.- Corresponde exclusivamente a la Federación, de acuerdo a lo ordenado por los artículos 73, fracción XXI, inciso a); 124 de la Constitución Federal, y 2, fracción II, de la Ley General, establecer los tipos penales y sanciones relativas a los delitos en materia de trata de personas.

ARTÍCULO 3.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, tienen la obligación de actuar con diligencia para perseguir y sancionar el delito de trata de personas, realizando las

investigaciones y acciones necesarias para sancionar a los responsables, brindar atención y protección a las víctimas y prevenir la comisión del delito, mediante el desarrollo de programas permanentes.

Las autoridades a las que alude el párrafo anterior, tendrán obligación de coordinarse con las autoridades federales en los términos que establezcan las leyes en dicha competencia.

ARTÍCULO 4.- Las autoridades ministeriales y judiciales del Estado investigarán, procesarán, enjuiciarán y sancionarán los delitos en materia de trata de personas, cuando se actualice su competencia conforme al artículo 5 de la Ley General y deberán ajustar sus actuaciones, en todo momento, a las disposiciones de dicho ordenamiento federal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la competencia de las autoridades del Estado, se surtirá cuando los delitos a que se refiere esta Ley se inicien, preparen o cometan en el territorio del Estado o cuando se inicien, preparen o cometan en otra entidad federativa, siempre que produzca o se pretenda que tengan efectos en el Estado de Durango y no se haya ejercitado acción penal en contra de los sujetos activos en esa diversa entidad federativa.

Serán aplicadas las disposiciones normativas de los Tratados que en la materia haya ratificado el Estado Mexicano, la legislación federal atinente, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

ARTÍCULO 5.- Son principios rectores en materia de prevención, atención y erradicación de la trata de personas, los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus garantías, los instrumentos internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, además de los previstos en la Constitución Política local y sus garantías. Obrarán además, en tratándose de dichas materias, los siguientes principios:

- I. Máxima protección;
- II. Perspectiva de género;
- III. Prohibición de la esclavitud y de la discriminación;
- IV. Interés superior de la infancia;
- V. Debida diligencia;
- VI. Prohibición de devolución o expulsión;
- VII. Derecho a la reparación del daño;
- VIII. Garantía de no revictimización;
- IX. Laicidad y libertad de religión;
- X. Presunción de minoría de edad; y
- XI. Las medidas de atención, asistencia y protección, beneficiarán a todas las víctimas del delito de trata de personas con independencia de si el sujeto activo ha sido identificado, aprehendido, juzgado o sentenciado, así como de la relación familiar, de dependencia, laboral o económica que pudiera existir entre éste y la víctima.

ARTÍCULO 6.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

- I. Centros de Atención Especializados: Los refugios, albergues y casas de medio camino con servicios integrales a víctimas de los delitos de Trata de Personas;
- II. Ley: La Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de la Trata de Personas en el Estado de Durango;
- III. Ley General: La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos;
- IV. Menores: Todo ser humano menor de 18 años;
- V. Órgano: Entidad pública interinstitucional encargada de coordinar las políticas públicas es materia de Trata de Personas;
- VI. Personas adultas mayores: Aquellas personas mayores de sesenta años y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio duranguense;
- VII. Programa: Instrumento rector en materia de prevención del delito de trata de personas, asistencia y protección de las víctimas del delito de trata de personas, y
- VIII. Víctima de trata: Aquella persona que haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones relacionadas con la trata de personas.

CAPITULO SEGUNDO

DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS

- ARTÍCULO 7.- En el Estado de Durango se establecerá un Órgano Interinstitucional, para coordinar las políticas públicas en la materia, que elaborará y ejecutará un programa estatal el cual contendrá las acciones relativas a la prevención, atención y erradicación del delito de trata de personas por parte de la autoridad.
- ARTÍCULO 8.- El Órgano al que se refiere el artículo anterior, deberá ser integrado al menos de la siguiente manera:
- I. Un representante de cada uno de los Poderes del Estado;
- El representante del Poder Ejecutivo será el Secretario General de Gobierno, quien fungirá como Presidente del Órgano;
- El representante del Poder Legislativo, lo será preferentemente el Presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos; y el Representante del Poder Judicial del Estado, el que designe el Consejo de la Judicatura;
- II. El Secretario de Seguridad Pública, que será el Secretario Técnico del mismo;
- III. El Fiscal General del Estado:

- IV. Los Secretarios de Desarrollo Social, Educación, Salud, Turismo y Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado;
- V. El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;
- VI. El Director General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;
- VII. La Directora del Instituto de la Mujer Duranguense; y
- VIII. El Director del Instituto Duranguense de la Juventud.

Por cada miembro, habrá un suplente designado por su titular; el suplente deberá tener el nivel inmediato inferior.

Para efectos de consulta y asesoría, el Órgano interinstitucional, podrá invitar a sus reuniones a representantes de organizaciones de la sociedad civil que tengan como objeto la defensa y promoción de los derechos humanos, así como a expertos académicos vinculados con el tema y a los representantes de dependencias públicas federales, que por la naturaleza de sus funciones se requieran.

ARTÍCULO 9.- El Órgano tendrá carácter consultivo ante el Gobierno Estatal y será el coordinador de las acciones que se desarrollen en el Estado de Durango, a través de los programas específicos en la materia.

ARTÍCULO 10.- Corresponde al Órgano, la realización de las siguientes actividades:

- I. Elaborar y coordinar la ejecución del Programa Estatal, que será el eje de la política estatal en esta materia, y realizar seguimiento a su ejecución;
- II. Garantizar la correcta aplicación de las normas establecidas en esta Ley;
- III. Impulsar planes, protocolos, programas, modelos, manuales y procedimientos de prevención, protección y atención especial;
- IV. Proponer a las instancias correspondientes las reformas legislativas y administrativas, encaminadas a la prevención, sanción y erradicación de la trata de personas;
- V. Desarrollar programas o proyectos productivos que permitan la reinserción laboral y social de las víctimas;
- VI. Articular acciones y programas tendentes a la atención de las víctimas y prevención de la trata de personas;

VII. Impulsar la elaboración de los planes para la instalación y/o construcción de Centros de Atención Especializados, recomendando las características de éstos para que se observen las normas técnicas en la materia, donde se les brinden las condiciones para garantizar el respeto a sus derechos humanos, así como alojamiento por el tiempo necesario, asistencia jurídica, médica, psicológica y psiquiátrica, alimentación y los cuidados, atendiendo a las necesidades particulares de las víctimas con especial referencia a las niñas, niños, adolescentes y mujeres;

- VIII. Monitorear y vigilar de manera permanente que los anuncios clasificados que se publiquen por cualquier medio en territorio estatal, sean establecidos conforme a los lineamientos que emita el Gobierno Federal;
- IX. Crear registros suficientes y eficientes para actualizar la información sobre trata de personas;

- X. Realizar seguimiento y estudiar los efectos de las normas, programas y actividades de lucha contra la trata de las personas en los Derechos Humanos y recomendar medidas y acciones para su adecuación y mejoramiento;
- XI. Proponer las investigaciones y estudios necesarios para conocer la situación de la trata de personas en la entidad; y
- XII. Las demás que se consideren necesarias para su funcionamiento;
- ARTÍCULO 11.- El Órgano aprobará el Reglamento que lo organice, así como su funcionamiento.

CAPÍTULO TERCERO DE LAS FACULTADES DE INVESTIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES ESTATALES

- ARTÍCULO 12.- El Ministerio Público, además de las facultades que le confieren otros ordenamientos, durante la fase de investigación tendrá las siguientes:
- I. Solicitar la intervención de comunicaciones, en términos de la legislación federal o local aplicable;
- II. Solicitar información a las empresas telefónicas y de comunicación, en términos de la legislación federal o local aplicable;
- III. Autorizar el seguimiento de personas hasta por un período de un mes, el cual podrá ser prorrogado siempre que existan motivos suficientes, sin que la misma tenga una duración mayor a seis meses, en términos de la normatividad aplicable;
- IV. Solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la actividad financiera de las personas sujetas a investigación, en términos de la legislación federal o local aplicable;
- V. Autorizar la colaboración de informantes, en los términos de los lineamientos mínimos que emita el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como demás disposiciones;
- VI. Autorizar la utilización de cualquier medio, instrumentos o herramienta para la obtención de pruebas, siempre que ésta no contravenga los derechos humanos ni violente el orden jurídico; y
- VII. Todas aquellas que determinen las leyes aplicables.
- Para los efectos de este artículo, el Ministerio Público se podrá coordinar con las instituciones análogas de procuración de justicia de la Federación u otros Estados en la investigación.
- ARTÍCULO 13.- Las policías bajo la dirección y conducción del Ministerio Público, además de las facultades que les confieran otros ordenamientos, durante la fase de investigación tendrán las siguientes:
- I. Recabar información en lugares públicos, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la generación de inteligencia. En el ejercicio de esta atribución se deberán respetar los derechos particulares de los ciudadanos;
- II. Recabar información de bases de datos públicos, con el objeto de identificar a las víctimas, testigos, lugares de los hechos, forma de operar, sujetos involucrados o bienes de éstos;
- III. Realizar análisis técnico táctico o estratégico de la información obtenida para la generación de inteligencia:

IV. Verificar la información que reciba sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito o delitos para informarlo al Ministerio Público; y

V. Efectuar el procesamiento del lugar de los hechos, para lo cual deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme al procedimiento previamente establecido por éste y en términos de las disposiciones aplicables, en caso de contar con personal calificado para tal fin.

ARTÍCULO 14.- Tendrá la calidad de informante, toda aquella persona que reúna las características que establece el artículo 58 de la Ley General.

ARTÍCULO 15.- En los casos en que las autoridades locales carezcan de normatividad para el ejercicio de cualquiera de las atribuciones señaladas en los artículos 12 y 13 de la presente Ley, se solicitará a la Procuraduría General de la República coadyuve en la investigación, conforme lo establecido en el artículo 57 de la Ley General.

CAPÍTULO CUARTO

DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

ARTÍCULO 16.- Además de las establecidas en la Ley General, corresponde a los gobiernos de los Municipios del Estado de Durango la realización de las siguientes actividades:

- I. Proporcionar, la asistencia jurídica y el apoyo médico, psicológico y social a las víctimas de trata de personas;
- II. Coordinarse con las organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones sociales, para llevar a cabo acciones de prevención de la trata de personas;
- III. Participar de las actividades que se deriven de la puesta en práctica del Programa Estatal que implemente el Órgano;
- IV. Llevar a cabo procesos de capacitación de su personal en materia de prevención y detección de la trata de personas;
- V. Coadyuvar en las investigaciones relacionadas con el delito de trata de personas;
- VI. Coordinarse con las instancias de Seguridad y Procuración de Justicia federales y estatales, para coadyuvar en la denuncia e investigación del delito de trata de personas; y
- VII. Las demás que se establezcan en esta Ley o que se deriven de las acciones de la aplicación del Programa Estatal, así como las que se deriven de las disposiciones federales.

CAPÍTULO QUINTO

DE LA PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS

SECCIÓN PRIMERA

DE LA PREVENCIÓN

ARTÍCULO 17.- El Órgano realizará las acciones tendentes a fortalecer la participación ciudadana, la responsabilidad social, la cultura de la denuncia y la prevención social del delito, para lo cual deberá:

- I. Sensibilizar a la población mediante la divulgación de material referente al delito de trata de personas y los derechos de las víctimas;
- II. Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados por los responsables del delito de trata de personas para captar o reclutar a las víctimas;
- III. Informar sobre los riesgos a la salud que sufren las víctimas de trata de personas;
- IV. Fomentar la participación ciudadana y la solidaridad, a fin de reducir los factores de vulnerabilidad de las personas;
- V. Promover la cultura de la denuncia como un factor indispensable en la lucha contra el crimen organizado, la impunidad y la aceptación social del delito; y
- VI. Las demás que considere necesarias para la prevención del delito de trata de personas.
- ARTÍCULO 18.- Las políticas públicas, los programas y demás acciones que se adopten, de conformidad con el presente capítulo, cuando proceda, deberán incluir la intervención de organismos no gubernamentales y de la sociedad civil.
- ARTÍCULO 19.- El Órgano fomentará el diseño, evaluación y actualización de los planes y programas de capacitación y formación de servidores públicos en materia de prevención, atención y combate al delito de trata de personas, conforme a las siguientes reglas:
- I. Proporcionar la capacitación y formación continua a los servidores públicos, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas. Estas actividades estarán dirigidas, como mínimo, a todos los miembros de las instituciones y corporaciones vinculadas a la seguridad pública, procuración y administración de justicia; y
- II. La capacitación y formación tendrán como principio rector el respeto a los derechos fundamentales de la víctima, y el ofendido.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

ARTÍCULO 20.- Las autoridades estatales realizarán las acciones necesarias para identificar a las víctimas del delito de trata de personas, y adoptarán las siguientes medidas de atención y protección:

- I. Proporcionarán orientación jurídica, asistencia social, educativa y laboral a las víctimas del delito de trata de personas. En el caso de que las víctimas pertenezcan a alguna etnia o comunidad indígena o hablen un dialecto o idioma diferente al castellano se designará a un traductor, quien le asistirá en todo momento;
- II. Procurar brindar asistencia material, médica y psicológica, en todo momento, a las víctimas del delito, la cual, según sea el caso, deberá ser en su lengua o idioma;
- III. Fomentarán oportunidades de empleo, educación y capacitación para el trabajo, a las víctimas del delito;
- IV. Procurarán el auxilio inmediato de la autoridad competente para los extranjeros víctimas del delito, brindando, en su caso, la orientación jurídica mínima y la asistencia básica que requieran;
- V. Garantizar que la estancia en Centros de Atención Especializados o en cualquier otra instalación diseñada para la asistencia y protección de las víctimas de los delitos materia de la Ley General, que correspondan al fuero común, sea de carácter voluntario y cuenten con medios para poder comunicarse, siempre y cuando el o los sujetos activos del delito no se presuman integrantes de la delincuencia organizada y estas medidas pongan en peligro la vida, integridad y seguridad del pasivo del delito y de aquellas víctimas con las que comparta las medidas de protección y asistencia;
- VI. Garantizar que bajo ninguna circunstancia se alberge a víctimas nacionales o extranjeras, en centros preventivos, penitenciarios o estaciones migratorias, ni lugares habilitados para ese efecto;
- VII. Proporcionarán protección, seguridad y salvaguarda de la integridad de la víctima y la de sus familiares ante amenazas, agresiones, intimidaciones o venganzas; garantizando su derecho a la confidencialidad; y
- VIII. Proporcionarán asistencia jurídica respecto de los derechos y procedimientos legales a seguir durante todo el proceso legal, en especial, para exigir la reparación del daño sufrido.
- ARTÍCULO 21.- Corresponde de manera exclusiva a las autoridades del Estado, en su respectivo ámbito de competencia, la creación de Centros de Atención Especializados para las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos que la Ley General establece como del fuero común o apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, para la creación y operación de los mismos, hasta la total recuperación de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la Ley General.
- ARTÍCULO 22.- El Órgano, propondrá la adopción de medidas para lograr la recuperación física, psicológica y social de las víctimas del delito de trata de personas; al efecto, podrá promover la participación de organizaciones no gubernamentales y demás actores de la sociedad civil.
- ARTÍCULO 23.- Las autoridades estatales, en el ámbito de sus competencias, garantizarán de manera efectiva la seguridad física de las víctimas del delito de trata de personas que se encuentren en territorio estatal.

CAPÍTULO SEXTO

DEL PROGRAMA ESTATAL

SECCIÓN PRIMERA

CONTENIDO DEL PROGRAMA

ARTÍCULO 24.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación federal, el Programa establecerá los mecanismos y acciones para la protección y asistencia de las víctimas así como los programas específicos de prevención.

ARTÍCULO 25.- El Órgano, en el diseño del Programa, deberá incluir los siguientes aspectos:

- I. Un diagnóstico de la situación que prevalezca en la materia, así como, la identificación de la problemática a superar;
- II. Los objetivos generales y específicos del programa;
- III. Las estrategias y líneas de acción del programa;
- IV. Los mecanismos de cooperación interinstitucional y de enlace con instancias similares que atiendan a víctimas y que aborden la prevención;
- V. Elaboración de estrategias sobre la participación activa y propositiva de la población;
- VI. Los criterios de vinculación, colaboración y corresponsabilidad con la sociedad civil organizada;
- VII. El diseño de campañas de difusión en los medios de comunicación, para sensibilizar a la sociedad sobre las formas de prevención y atención a víctimas;
- VIII. Promover la cultura de prevención de la trata de personas y la protección a las víctimas; y
- IX. Establecer la metodología de evaluación y seguimiento de las actividades que deriven de este programa, fijando indicadores para evaluar los resultados.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 26.- Las autoridades encargadas de la prevención, persecución del delito de trata de personas, así como de protección y asistencia a las víctimas, cooperarán entre sí, intercambiando información, a fin de fortalecer las acciones encaminadas a combatir, prevenir y sancionar la trata de personas y asistir a las víctimas de este delito.

- ARTÍCULO 27.- El Órgano, en coordinación con las autoridades Estatales y municipales promoverán la participación ciudadana, a fin de que la población y la sociedad civil organizada:
- I. Colaboren en la prevención del delito de trata de personas;
- II. Participen en las campañas y en las acciones derivadas del Programa Estatal a que se refiere esta Ley;
- III. Colaboren con las instituciones a fin de detectar a las víctimas del delito de trata, así como denunciar a los posibles autores del mismo;
- IV. Denuncien cualquier hecho que resulte violatorio a lo establecido en esta Ley;

- V. Den parte al Ministerio Público de cualquier indicio de que una persona sea víctima del delito de trata de personas; y
- VI. Proporcionen los datos necesarios para el desarrollo de investigaciones y estadísticas en la materia.

ARTÍCULO 28.- Con la participación ciudadana se podrán constituir fondos de financiamiento, en los que concurran las organizaciones civiles y sociales, las instituciones académicas, grupos empresariales y agencias de cooperación, que estarán destinados para el desarrollo de proyectos en la materia.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LA ASISTENCIA Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO

SECCIÓN PRIMERA

DE LA ASISTENCIA Y DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

ARTÍCULO 29.- Las víctimas de la trata de personas tienen derecho a:

- I. Recibir información sobre sus derechos en un idioma que comprendan y en forma accesible a su edad y madurez;
- II. Contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas, incluyendo la representación jurídica en las materias civil y familiar;
- III. Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado; en todo caso deberán atenderse las garantías procesales que le asistan en cuanto a la protección de su identidad;
- IV. La protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, en términos de la legislación federal en materia penal y en lo establecido en la ley Estatal para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal;
- V. La adopción de medidas tendentes a proteger su integridad física y psicológica;
- VI. Ser informadas del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso;
- VII. Ser oídas en todas las etapas del proceso;
- VIII. Permanecer en el país, previo acuerdo de la autoridad que así lo resuelva, de conformidad con la legislación vigente, y a recibir la documentación o constancia que acredite tal circunstancia, para la cual se dará de inmediato vista a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, para que proceda en consecuencia;
- IX. Que se les facilite el retorno al lugar en el que estuviera asentado su domicilio; y,
- X. Acceder de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, además de los derechos enunciados, se garantizará que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales que implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad. En ningún caso podrán ser sometidos a careos, en tratándose del sistema penal tradicional. Las medidas de protección de derechos aplicables no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su

libertad. En todo caso, se observarán las disposiciones contenidas en el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No será requisito la presentación de la denuncia penal o la cooperación en un proceso, para que la víctima goce de los derechos señalados en esta Ley.

El consentimiento dado por la víctima de trata de personas a toda forma de explotación no se tendrá en cuenta cuando se haya empleado cualquiera de los medios comisivos

ARTÍCULO 30.- Deberá garantizarse a las víctimas la asesoría y representación legal, en los asuntos del orden civil y familiar, que les permita obtener la custodia de sus hijos, el divorcio, la reparación de daño, la recuperación de sus bienes, entre otros.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA PROTECCIÓN ESPECIAL A MENORES DE EDAD

ARTÍCULO 31.- Atendiendo al principio de interés superior de la infancia, los servidores públicos en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo estudios psico-sociales, sobre la pertinencia de reincorporarlos a su núcleo familiar, tomando en cuenta para ello, la opinión que los menores de edad emitan.

Cuando del estudio psico-social se determine que la o el menor no pueden reincorporarse al núcleo familiar, se les deberá proporcionar asistencia social, que deberá incluir vivienda provisional, alimentación, estudios y cuidados de acuerdo a su edad, así como atención psicológica y médica, hasta lograr su· recuperación física y psicológica, además de las medidas de protección que permitan salvaguardar su integridad y seguridad.

ARTÍCULO 32.- Tratándose de menores de edad que participen en la averiguación previa o en los procesos penales, independientemente de lo establecido por la legislación de la materia, deberá protegerse su identidad y garantizarse su seguridad e integridad física y emocional.

ARTÍCULO 33.- Las medidas de protección y los tratamientos médicos y psicológicos que se proporcionen a los menores víctimas de trata, deberán llevarse a cabo en lugares separados de adultos, incluso de quienes han sido víctimas de trata.

SECCIÓN TERCERA

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

ARTÍCULO 34.- Todo servidor público que tenga conocimiento directo de conductas relacionadas con el delito de trata de personas, o bien, desde el momento que reciba o atienda a una víctima o testigo involucrado en el mismo, está obligado a ponerlo en conocimiento de la autoridad responsable, quien garantizará y solicitará, en su caso, todas las medidas de protección tendentes a salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de víctimas y testigos.

ARTÍCULO 35.- La víctima de trata de personas o testigo de las conductas delictivas de trata o delitos conexos, recibirá, en términos de la legislación aplicable, las medidas de protección necesarias.

ARTÍCULO 36.- Las medidas de protección durarán hasta que la víctima o testigo se encuentren libres de daños o amenazas u otros actos de intimidación, por parte de las personas acusadas.

CAPÍTULO OCTAVO

DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO

ARTÍCULO 37.- Todo servidor público en el ámbito de su competencia, procurará se garantice la reparación del daño a toda persona víctima de trata, esta reparación comprenderá al menos:

- I. Los gastos de asistencia, tratamientos y terapias médicas y/o psicológicas, rehabilitación física y psicológica para la víctima y sus dependientes;
- II. La reinserción social y ocupacional; y
- III. El pago por la naturaleza y gravedad de las afectaciones en su integridad física y mental.

ARTÍCULO 38.- A fin de garantizar la reparación del daño a la víctima, los servidores públicos, en el ámbito de su competencia, promoverán, y en su caso, determinarán el decomiso de los bienes muebles o inmuebles que se utilizaron para la comisión del delito, así como el embargo precautorio de los bienes del presunto responsable.

CAPÍTULO NOVENO

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA COOPERACIÓN ENTRE AUTORIDADES

SECCIÓN PRIMERA

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ARTÍCULO 39.- Todo servidor público en el ámbito de su competencia, promoverá la participación ciudadana en las acciones contra la trata de personas, la identificación y asistencia a las víctimas, y la denuncia anónima de lugares en donde se comete el delito y personas que lo promuevan o lo lleven a cabo.

ARTÍCULO 40.- Toda persona, que tuviesen conocimiento directo de conductas relacionadas con la trata de personas o de lugares donde se cometa este delito, las podrán denunciar ante la autoridad ministerial competente o al número telefónico de denuncia anónima que se establezca para tal efecto.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA COOPERACIÓN ENTRE AUTORIDADES

ARTÍCULO 41.- Los servidores públicos del Estado y los municipios, en el ámbito de su respectiva competencia, podrán llevar a cabo acuerdos de colaboración o coordinación con otras entidades federativas, municipios y la Federación, a efecto de:

- I. Identificar a las víctimas;
- II. Intercambiar información acerca de tratantes y de su forma de operar;
- III. Llevar a cabo investigaciones conjuntas;

IV. Participar en acciones de prevención, protección a las víctimas en su traslado a sus lugares de origen;

V. Identificar y entrevistar testigos; y

VI. Colaborar en todas aquellas acciones en las que se requiera una cooperación en beneficio de las víctimas.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan las contenidas en el presente Decreto.

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe.

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 09 (nueve) días del mes de diciembre del año 2014 (dos mil catorce).

LA COMISIÓN DE JUSTICIA

DIP. AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO PRESIDENTE

DIP. ROSAURO MEZA SIFUENTES SECRETARIO

DIP. ANAVEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ VOCAL

DIP. ISRAEL SOTO PEÑA VOCAL DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA VOCAL

LECTURA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN QUE CONTIENE LEY ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS Y PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación, le fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente, iniciativas con proyecto de decreto, enviadas la primera por los CC. Diputados Juan Quiñonez Ruíz, Ricardo del Rivero Martínez, Felipe de Jesús Enríquez Herrera, María Trinidad Cardiel Sánchez e Israel Soto Peña, integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, que contiene "Ley de Fomento y Protección al Periodismo del Estado de Durango" y la segunda por los CC. Diputados Carlos Emilio Soto Galindo, José Alfredo Martínez Núñez, Marco Aurelio Rosales Saracco y Felipe de Jesús Meraz Silva, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, partido Nueva Alianza, y Partido Duranguense, respectivamente, de la LXVI Legislatura, que contiene "Ley Estatal para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos"; por lo que conforme a la responsabilidad encomendada y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción I, 121, 176, 177 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, nos permitimos someter a la determinación de esta Asamblea, el presente Dictamen con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Esta Comisión al abocarse al estudio y análisis de las iniciativas aludidas en el proemio del presente dictamen da cuenta que con las mismas se pretende emitir la normatividad estatal, donde se establezcan las bases que vayan acorde con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 25 de junio de 2012, y con ello logar la implementación y operación de las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

SEGUNDO. Importante resulta destacar, que ambas iniciativas, se analizaron y de ellas se tomaron en cuenta los aspectos más relevantes para plasmarlos en la ley que ahora se eleva a consideración del Pleno, en razón de que el espíritu de los iniciadores, tiene como fundamento cumplir con las demandas de los periodistas y de las personas defensoras de los derechos humanos a nivel estatal, toda vez que al cumplir con una labor tan delicada, en donde muchas de las veces ponen en riesgo su integridad, es necesario que se les garantice la vida, la integridad, la libertad y la seguridad en el ejercicio de su labor profesional.

TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6° dispone que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; de igual modo el artículo 7° de este mismo ordenamiento federal, establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión. Por tal motivo, es importante materializar tales disposiciones, así como las establecidas en los distintos convenios internacionales que nuestro País ha suscrito en materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, ya que resulta substancial para la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho, pleno y democrático.

CUARTO. En ese mismo orden de ideas, el artículo 19 de la Declaración Universal de los <u>Derechos</u> Humanos establece normas para la <u>libertad</u> de expresión y de prensa. A pesar de la <u>organización</u> "Reporteros Sin Fronteras", en 2006 al menos ochenta y un periodistas fallecieron en el ejercicio de su trabajo o por expresar sus opiniones, en veintiún países. Hay que remontarse a 1994 para encontrar una cifra más alta. Aquel año encontraron <u>la muerte ciento tres</u> periodistas, de los que casi la mitad murieron en el genocidio de Ruanda, cerca de una veintena en Argelia, víctimas de la guerra civil, y una decena en la ex Yugoslavia. También destacan que murieron 32 colaboradores, al menos 871 periodistas fueron detenido, 1472 agredidos o amenazados, 56 secuestrados y 912 <u>medios de comunicación f</u>ueron censurados.

QUINTO. En tal virtud, los que suscribimos el presente dictamen, somos compatibles con las ideas de quienes presentaron las iniciativas, y en consecuencia, estamos ciertos que con las disposiciones de este este nuevo ordenamiento local, se podrá estar en coordinación con la federación para implementar y operar las medidas de prevención y protección que garanticen la integridad, la libertad y la seguridad de aquellos profesionales de la comunicación a través de los distintos medios y de las personas defensoras de derechos humanos de nuestra entidad.

SEXTO. Dentro de las disposiciones de esta ley se contemplan cinco capítulos, mismos a saber:

- I. En el Primero se establece lo relacionado al objeto de la ley y el glosario de los términos más utilizados dentro de este ordenamiento.
- II. En el Capítulo Dos, se contempla lo referente a la Oficina Local de Coordinación y Enlace para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, la cual es el área del Gobierno del Estado, perteneciente a la Secretaría General de Gobierno, encargada de coordinarse con el Mecanismo para el cumplimiento del objeto de esta Ley, así como de coordinar políticas públicas y acciones locales para la protección a los periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
- III. El Capítulo Tres prevé la Coordinación para la Protección, misma que tiene como objetivo principal, realizar el seguimiento puntual de las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas; Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección implementadas en el Estado de Durango.

- IV. En el Capítulo Cuarto denominado de los Derechos de los Periodistas, dentro de él se reconocen como derechos específicos a la naturaleza de la actividad periodística, el Secreto profesional, el Acceso a las fuentes de información, el Respaldo Estatal para la formación profesional continua y el Reconocimiento institucional como periodista.
- V. El Capítulo Quinto, denominado Inconformidades, Información Pública y Sanciones, contempla que las inconformidades que puedan ser presentadas respecto al desempeño de la Oficina Local de Coordinación y Enlace o de alguna de las autoridades locales en relación a Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección se desarrollarán conforme al procedimiento y requisitos establecidos en la Ley de Proyección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y demás ordenamientos aplicables.

SÉPTIMO. En conclusión, es necesario puntualizar, que de las propuestas realizadas para elaborar el presente dictamen, como bien se mencionó anteriormente, se tomaron en cuentas las más relevantes y sobre todo aquellas que son viables plasmarlas en este ordenamiento, toda vez que de las mismas propuestas, se desprende que algunas otras deben ir en el Reglamento o en sus lineamientos correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima, que al cumplir con las disposiciones constitucionales y legales, las iniciativas cuyo estudio nos ocupan, con las adecuaciones realizadas a las mismas son procedentes, lo anterior, con fundamento en lo que dispone el artículo 182 último párrafo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, en virtud de considerar que las mismas, obedecen al mejoramiento de forma y fondo jurídicos. Asimismo, se somete a la determinación de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. Se crea la Ley Estatal Para La Protección De Periodistas Y Personas Defensoras De Derechos Humanos, para quedar como sigue:

LEY ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS Y PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS.

CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio del Estado de Durango.

Tiene por objeto establecer la normatividad local de cooperación del Estado con la Federación, acorde con lo establecido en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para lograr la implementación y operación de las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo; las atribuciones propias del Estado en la materia; así como los derechos de las y los periodistas.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Agresiones: Daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Beneficiario: Persona a la que se le otorga las Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección a que se refiere esta Ley.

La Coordinación: Coordinación Ejecutiva Nacional.

Ley Federal: Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Mecanismo: Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Medidas de Prevención: Conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como para combatir las causas que las producen y generar garantías de no repetición.

Medidas Preventivas: Conjunto de acciones y medios a favor del beneficiario para evitar la consumación de las agresiones.

Medidas de Protección: Conjunto de acciones y medios de seguridad para enfrentar el riesgo y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad del beneficiario.

Medidas Urgentes de Protección: Conjunto de acciones y medios para resguardar, de manera inmediata, la vida, la integridad y la libertad del beneficiario.

Oficina Local: Oficina Local de Coordinación y Enlace para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Peticionario: Persona que solicita Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección ante el Mecanismo.

Periodistas: Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.

Persona Defensora de Derechos Humanos: Las personas físicas que actúen individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos.

Procedimiento Extraordinario: Procedimiento que deriva en Medidas Urgentes de Protección con el fin de preservar la vida e integridad del beneficiario.

CAPÍTULO II

Oficina Local de Coordinación y Enlace para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos

Artículo 3. La Oficina Local de Coordinación y Enlace para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos es el área del Gobierno del Estado, perteneciente a la Secretaría General de Gobierno, encargada de coordinarse con el Mecanismo para el cumplimiento del objeto de esta Ley, así como de coordinar políticas públicas y acciones locales para la protección a los periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Artículo 4. La Oficina Local de Coordinación y Enlace contará con un Encargado General, así como con los apoyos técnicos y recursos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 5. El Encargado General de la Oficina Local de Coordinación y Enlace será designado por el Secretario General de Gobierno y fungirá como enlace con el Mecanismo para efectos de coordinación y cumplimiento de convenio.

Artículo 6. La Oficina Local de Coordinación y Enlace conformará una lista de enlaces operativos de las diversas dependencias locales y de las asociaciones de periodistas en el Estado, con las cuales se coordinará a efecto de cumplir con los fines de protección de periodistas.

Para el caso de las personas defensoras de derechos humanos, se establecerá coordinación permanente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como con las organizaciones encargadas de la defensa y promoción de los derechos humanos debidamente registradas ante esta.

CAPÍTULO III Coordinación PARA LA PROTECCIÓN

Artículo 7. A La Oficina Local de Coordinación y Enlace le corresponde prioritariamente:

- I. Asegurar que se ejecuten las Medidas Urgentes de protección, por parte de las dependencias correspondientes, que le sean solicitadas al Estado por parte de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo, de acuerdo con los términos y plazos establecidos en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como en su reglamento.
- II. Asegurar el cumplimiento de las Medidas Preventivas y las Medidas de Protección, que se emitan en favor de los Beneficiarios que se encuentren en el Estado de Durango, de conformidad con los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno del Mecanismo, de acuerdo con los términos y plazos establecidos en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como en su reglamento.
- III. Realizar el seguimiento puntual de las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas; Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección implementadas en el Estado de Durango.
- IV. Participar, previo consentimiento del Beneficiario e invitación de la Junta de Gobierno del Mecanismo, en las sesiones en que se discutan casos relacionados con el Estado de Durango.
- V. Implementar, en caso dado, los protocolos, manuales y, en general, los instrumentos que contengan las mejores prácticas disponibles para el cumplimiento del objeto de la presente Ley, que les sean facilitados por la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo.

Artículo 8. En la ejecución, cumplimiento y seguimiento de las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección implementadas en el Estado, la Oficina Local de Coordinación y Enlace, así como las dependencias que llegaren a intervenir, se guiarán por los principios de celeridad y eficacia.

Artículo 9. En la ejecución, cumplimiento y seguimiento de las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección y las Medidas Urgentes de Protección, la Oficina Local de Coordinación y Enlace así como las dependencias que en su caso correspondan deberán cumplir estrictamente con los criterios, estándares y directrices en la ejecución de las Medidas, establecidos en la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Artículo 10. La Oficina Local de Coordinación y Enlace y los demás órganos del gobierno estatal que correspondan se coordinarán entre sí, y con el Mecanismo en dado caso, de conformidad con sus respectivas atribuciones y en el ámbito de sus competencias, para las siguientes acciones adicionales conjuntas:

- Investigar y sancionar las agresiones de las que sean objeto las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
- II. Recopilar y analizar toda la información necesaria para evitar agresiones potenciales a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
- III. Desarrollar e implementar Medidas de Prevención para el diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales agresiones.
- IV. Promover las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, así como las acciones tendientes a desarrollar y consolidar métodos locales de evaluación, ejecución y seguimiento de protección.
- V. Promover el reconocimiento público y social de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
- VI. Intercambiar información y experiencias técnicas, así como coordinarse a efectos de capacitación.
- VII. Promover el estudio, análisis, investigación y desarrollo de estrategias, acciones, sistemas y metodologías que incorporen las mejores prácticas de prevención y protección.
- VIII. Realizar los demás actos necesarios para el cumplimiento del objeto de esta Ley.

Artículo 11. En caso de que se llegasen a configurar hechos que sean posiblemente constitutivos de delito hacia periodistas, la Oficina Local de Coordinación y Enlace colaborará, en la medida de sus atribuciones, en lo necesario con la Fiscalía General del Estado.

De igual forma la Oficina Local de Coordinación y Enlace se coordinará con la Fiscalía, a fin de programar proyectos de capacitación a ministerios públicos, así como a los cuerpos de investigación que correspondan en materia de agresiones en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Artículo 12. La Oficina Local de Coordinación y Enlace buscará establecer convenios de colaboración con organismos públicos y privados para fomentar la protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como para implementar acciones de prevención.

CAPÍTULO IV DE LOS DERECHOS DE LOS PERIODISTAS

Artículo 13. La presente Ley, reconoce como derechos específicos inherentes a la naturaleza de la actividad periodística, los siguientes:

- I. Secreto profesional;
- II. Acceso a las fuentes de información;
- III. Respaldo Estatal para la formación profesional continua; y
- IV. Reconocimiento como periodista;

Artículo 14. Para los efectos de esta Ley se entenderá como Secreto Profesional de los periodistas su Derecho para negarse a revelar la identidad de sus fuentes de información, cuando esté considerada como reservada, siempre y cuando ésta se difunda con apego a la legalidad y a los principios rectores de veracidad, imparcialidad, objetividad, equidad y responsabilidad y esté debidamente contrastada y/o documentada.

El secreto profesional comprenderá las notas de apuntes, equipo de grabación y de cómputo, directorios, registros telefónicos, así como los archivos personales y profesionales que pudieran llevar a la identificación de sus fuentes de información.

A su vez, las personas Periodistas y Colaboradoras periodísticas deberán abstenerse de proporcionar información que reciban, conozcan o tengan en su poder y que sea considerada de carácter reservada.

Artículo 15. Las instancias generadoras de información deberán facilitar el acceso a los periodistas debidamente acreditados a todos los edificios e instalaciones públicas, salvo que por cuestiones de horario o seguridad, la autoridad competente determine lo contrario. No podrá impedirse la toma de imágenes de estos lugares, salvo que así se disponga por razones de seguridad o conservación y preservación de aquellos que constituyan patrimonio histórico.

Los particulares no podrán prohibir la presencia de periodistas debidamente acreditados en los actos señalados en el artículo anterior, una vez cubiertos los requisitos previamente establecidos para su ingreso.

Artículo 16. La Secretaría de Educación del Estado y las representaciones del gremio periodístico con reconocimiento, impulsarán la celebración de convenios de colaboración con instituciones de educación pública y privada, con el propósito de lograr alternativas de profesionalización para sus agremiados.

Artículo 17. Toda persona dedicada al periodismo tendrá la libertad de buscar, investigar, sistematizar, difundir o publicar hechos, ideas u opiniones a través de cualquier medio de comunicación legal, el Estado le reconocerá y brindará las facilidades necesarias para que reciba y difunda la información considerada de interés público de manera veraz e imparcial.

CAPITULO V inconformidades, INFORMACIÓN PÚBLICA

y sanciones

Artículo 18. Las inconformidades que puedan ser presentadas respecto al desempeño de la Oficina Local de Coordinación y Enlace o de alguna de las autoridades locales en relación a Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección se desarrollarán conforme al procedimiento y requisitos establecidos en la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 19. Los criterios para definir y utilizar la información de acceso público y la reservada, serán de acuerdo con la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Artículo 20. Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley se sancionarán conforme a lo que establezca la legislación aplicable, con independencia de las del orden civil o penal que procedan.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado en un plazo no mayor de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, elaborará el Reglamento correspondiente.

TERCERO. La Oficina Local de Coordinación y Enlace deberá iniciar su funcionamiento en un plazo no mayor de ciento ochenta días de la entrada en vigor de la presente Ley.

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente.

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, sancionará, promulgará, y dispondrá se publique, circule y observe.

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 15 (quince) días del mes de diciembre del año 2014 (dos mil catorce).

LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

DIP. ROSAURO MEZA SIFUENTES
PRESIDENTE

DIP. AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO SECRETARIO

DIP. ARTURO KAMPFNER DÍAZ VOCAL

DIP. ISRAEL SOTO PEÑA VOCAL

> DIP. EUSEBIO CEPEDA SOLÍS VOCAL

LECTURA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE DURANGO.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Seguridad Pública, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por los CC. Diputados Manuel Herrera Ruíz, Julián Salvador Reyes, Arturo Kampfner Díaz y Agustín Bernardo Bonilla Saucedo, integrantes de la LXVI Legislatura, que contiene Reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Durango; por lo que en cumplimiento de la responsabilidad encomendada y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, 124, 176, 177, 178 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, nos permitimos someter a la determinación de esta Asamblea, el presente dictamen, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Con fecha 13 de Noviembre del año en curso, le fue turnada a esta Comisión dictaminadora, iniciativa que contiene reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Durango, la cual tiene como objetivo principal, que dentro de la integración de la Fiscalía General del Estado de Durango, el Vicefiscal de Protección a los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Delito, también contemple la Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos, así como agregar a esta figura la atribución de coadyuvar y darle seguimiento a las investigaciones y, en su caso, a la persecución de los delitos cometidos en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

SEGUNDO.- Con fecha 25 de Junio de 2012, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, en la cual se establece la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

TERCERO.- Dado lo anterior, nuestra entidad, siguiendo esta misma línea de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, enriquece su marco jurídico, robusteciendo los mecanismos en el ámbito de la procuración de justicia, para brindar mayor salvaguardia a los derechos de estos dos sectores fundamentales del entramado duranguense.

EN BASE A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CONSIDERADO, ESTA COMISIÓN QUE DICTAMINA, ESTIMA QUE LA INICIATIVA CUYO ESTUDIO NOS OCUPA, ES PROCEDENTE, CON LAS ADECUACIONES REALIZADAS A LA MISMA, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 182 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO, EN VIRTUD DE CONSIDERAR QUE LAS MISMAS, OBEDECEN AL MEJORAMIENTO DE FORMA, ASÍ MISMO NOS PERMITIMOS SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE REPRESENTACIÓN POPULAR, PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN CORRESPONDIENTE EN SU CASO, EL SIGUIENTE:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 5 y 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Durango, para quedar como sigue:

Artículo 5.- La Fiscalía General es la dependencia del Ejecutivo del Estado, dotada de autonomía técnica de gestión, en el que se deposita la Institución del Ministerio Público, y se integra por:

De la I a la IV ...

V. Vicefiscal de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del Delito, Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos;

De la VI a la XV...

Artículo 16.- El Vicefiscal de Protección a los Derechos Humanos, Atención a las Víctimas del Delito, Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, tendrá las siguientes atribuciones:

De la I a la VII...

VIII. Coadyuvar y darle seguimiento a las investigaciones y, en su caso, a la persecución de los delitos cometidos en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; y

IX. Las demás que le confieran el Fiscal General y otros ordenamientos.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido del presente.

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe.

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (2) días del mes de Diciembre de 2015 (dos mil quince).

LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIP. JOSÉ ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX
PRESIDENTE

DIP. JULIÁN SALVADOR REYES

SECRETARIO

DIP. FELIPE MERAZ SILVA

VOCAL

DIP. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ

VOCAL

DIP. ALICIA GARCÍA VALENZUELA

VOCAL

PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO "BIENVENIDO PAISANO" PRESENTADO POR EL DIPUTADO FELIPE MERAZ SILVA

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO, SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LAS DELEGACIONES DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ADEMÁS DE LAS CORRESPONDIENTES AUTORIDADES LOCALES, QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA BIENVENIDO PAISANO; PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, OTORGUEN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN CON EFICACIA, RESPONSABILIDAD Y PLENO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS A QUIENES INGRESEN AL TERRITORIO ESTATAL PROVENIENTES DEL EXTRANJERO O DE LAS DEMÁS ENTIDADES DE LA REPÚBLICA.

PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO "DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS EN LA LEGISLACIÓN LABORAL" PRESENTADO POR EL DIPUTADO ISRAEL SOTO PEÑA.

PUNTO DE ACUERDO

EXHORTAR A LA DELEGACIÓN DURANGO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL, REVISE, SANCIONE Y CITE AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, ASÍ COMO A LA EMPRESA LEONI, PARA SOLUCIONAR CONFORME A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS Y NUESTRA LEGISLACIÓN FEDERAL EN MATERIA LABORAL, LA PROBLEMÁTICA DE LA FAMILIA Y LA BEBE DAYANA NICOLE OCHOA LUCAS, QUIEN ES VÍCTIMA INSTITUCIONAL DEL DIF MUNICIPAL DE DURANGO Y LA EMPRESA LEONI, POR LAS LESIONES CEREBRALES QUE SE LE OCASIONARON EN UNA GUARDERÍA DEL DIF MUNICIPAL DE DURANGO, CONTRATADA POR LA EMPRESA ALEMANA LEONI.

PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN CUITLÁHUAC AVALOS MÉNDEZ, DENOMINADO "VIVIENDA".

PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA GARCÍA VALENZUELA, DENOMINADO "PREVENCIÓN".

PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR EL DIPUTADO FELIPE DE JESÚS ENRÍQUEZ HERRERA, DENOMINADO "ADMINISTRACIÓN PUBLICA".

PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ, DENOMINADO "ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".

PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ, DENOMINADO "DIVERSIDAD DE GÉNERO EN DURANGO".

PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR EL DIPUTADO ISRAEL SOTO PEÑA, DENOMINADO "DÍA DEL MIGRANTE".

CLAUSURA DE LA SESIÓN.